

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Panamá

Enero 2012

Editada en junio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 107

**Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá**



Integrantes Marco A. Gandásegui
Azael Carrera

Fuentes A EVE Panamá, FRENADESO, Radio
Temblor, Kaos en la Red y Partido
Alternativa Popular

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Panamá

Cronología del conflicto social

Enero de 2012

Domingo 1

El ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), John Bennett, se muestra escéptico frente al aumento salarial que se sitúa entre el 15 y el 18%. El economista señala que los gobiernos deberían efectuar “estudios serios luego de aplicar estas medidas”. Por su parte, el economista Felipe Chapman subraya que un aumento de salario de entre el 15 y el 18% constituye una “barrera adicional ficticia que dificulta la creación del empleo formal y es un incentivo a la propensión del empleo informal”, y que “no sólo se traducirá en un mayor traslado al sector informal, que ya anda por el 44%, sino que también producirá desempleo”.

Lunes 2

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, arremete contra segmentos del sector empresarial, a quienes llama “empresarios”, y los distintos medios de comunicación del país, durante su discurso como parte de los actos protocolares para el inicio de la tercera sesión ordinaria, de la Asamblea Nacional de Diputados.

Los trabajadores siguen en la pelea por el aumento general de salario que el ejecutivo no contempló en el ajuste que comenzó a regir este uno de enero. Genaro López, uno de los representantes de los gremios de obreros, revela los pormenores de una larga negociación, donde ambas partes quedaron insatisfechas, y un tercero, el ejecutivo, tomó una decisión que les perjudica.

Los moradores del distrito de Mariato, sur de Veraguas, amenazan con cierres de vías para llamar la atención del gobierno nacional, por el mal estado de la carretera nacional Atalaya-Ponuga-Mariato.

Martes 3

Representantes y alcaldes electos de la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA) y de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) presentan una denuncia en contra del gobierno de Martinelli, por el supuesto abuso cometido por la Policía Nacional, el miércoles 28 de diciembre de 2011, en Divisa, cuando fueron desalojados de la carretera con gas lacrimógeno y pimienta, donde además hubo heridos. Piden a la defensora del Pueblo, Patria Portugal, una investigación por abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional en la manifestación.

Elementos del grupo Control de Multitudes de la Policía Nacional, dispersan, con gases lacrimógeno y pimienta, a un grupo de manifestantes, en su mayoría mujeres de la comunidad Altos del Atlántico, en el corregimiento de Cristóbal, en Colón, quienes exigen el suministro de agua potable.

El discurso del presidente Ricardo Martinelli al inicio de sesiones en la Asamblea Nacional se convierte en una polémica. El grupo Alianza Ciudadana, en un comunicado, llama a la comunidad a estar atenta ante los cambios que se avecinan.

Jueves 5

Por espacio de hora y media, moradores de al menos 15 comunidades, de los corregimientos de Cristóbal, Cativá y Sabanitas, protestan de forma pacífica frente a la entrada del sector de La Verbena, para exigir una vez más el suministro de agua potable. Los quejosos se apuestan desde la mañana en la acera y en el centro de las vías, entregan volantes donde se explica la situación y el tiempo que tienen las comunidades sin recibir el vital líquido. Entre ellas está la de Altos del Atlántico, que lleva alrededor de cuatro meses sin servicio.

A la mitad de su mandato, la popularidad del presidente panameño, Ricardo Martinelli, empieza a rozar el 50% de aceptación, en comparación con los demás colegas de la región americana. La firma mexicana, consultora Mitofsky, presenta un análisis en el que compara a los gobernantes americanos. Martinelli está tan sólo un punto por encima de la mitad de los niveles de aceptación, al ser ubicado con en el 51%.

Viernes 6

Dirigentes del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) exigen al procurador de la nación, José Ayú Prado, que inicie una investigación por los escándalos en los que se ha visto involucrado el gobierno de Ricardo Martinelli.

Un grupo de panameños, convocado por la Asociación “Ángeles de los Animales” y apoyado por la Asociación “Amigos de los Animales y la Naturaleza de Panamá”, protesta pacíficamente contra el Circo de Beijing, instalado en los estacionamientos de *Albrook Mall*. Karina Bazán, presidenta de la Asociación “Ángeles de los Animales”, expresó que muchos animales son sacados de sus *hábitats*, encerrados por años y con entrenamientos crueles.

Sábado 7

La dirigencia del partido en formación llamado Frente Amplio por la Democracia (FAD) se manifiesta a favor de la solicitud, de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, de retirar del segundo debate el proyecto de modificaciones al Código Electoral, para que pueda ser analizado a profundidad. Según el FAD, dichos cambios permitirían bloquear la “narcopolítica” en los procesos electorales, además de que condenan la actitud del oficialismo ante el proyecto.

Tras el anuncio del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) de realizar manifestaciones en las calles, para que se restablezca el salario de las grandes cadenas de comercio al por menor en dos dólares con 14 centavos, las partes negociadoras de la Mesa de Salario Mínimo informan que se reunirán el próximo miércoles. El sindicalista Mariano Mena cuestiona la disparidad en los ingresos de los trabajadores establecidos recientemente, y afirma que se debió de buscar el beneficio de la clase trabajadora y no de los empresarios. El pasado 30 de diciembre se

emitió un documento que nivelaba los salarios, pero a la baja, quedando todos en dos dólares con ocho centavos.

Domingo 8

El presidente de la extinta Comisión de la Verdad, Alberto Almanza, pide que la mesa de debate entre el gobierno, las víctimas y los familiares de los desaparecidos por la dictadura también se concentre en que se investigue el paradero de los restos de quienes fallecieron durante la invasión de 1989. “Es un deber hacer justicia investigando hasta el fondo, y sin matices políticos”, afirma.

Lunes 9

Un grupo de personas liderado por egresados del Instituto Nacional –conocido también como el “nido de águilas”– sube a la cima del Cerro Ancón en compañía de la sociedad civil, para recordar los hechos del 9 de enero de 1964, cuando estudiantes se enfrentaron a los norteamericanos en la lucha por la soberanía de la zona del canal de Panamá.

Martes 10

Las personas que trabajan en los distintos supermercados del país manifiestan sentirse inconformes con el nuevo salario mínimo fijado por el órgano ejecutivo, luego de que trabajadores y empresarios no lograran ponerse de acuerdo durante el 2011. Expresan que han quedado en desventaja al fijarse el nuevo salario mínimo en 2.08 dólares la hora, cuando debería de ser de 2.14.

Un grupo de moradores de la Isla Pedro González protesta frente al Ministerio Público, porque el grupo empresarial Eleta quiere sacarlos de sus tierras para construir un proyecto turístico.

Miércoles 11

El dirigente sindical Rafael Chavarría expresa que ante el aumento del salario mínimo, fijado por el ejecutivo entre 15 y 18%, el cual mantiene inconforme a varios sectores de los trabajadores, el movimiento al que representa no se equivocó sobre la propuesta presentada. Según el dirigente, la propuesta de 540 dólares mensuales que presentaron ante la Comisión Nacional del Salario Mínimo, les está dando la razón, tras conocer que la canasta básica familiar de alimentos aumentó a unos 300 mil 833 dólares en noviembre de 2011.

La protesta protagonizada el pasado 28 de diciembre por concejales y alcaldes de todo el país podría repetirse si no se logran acuerdos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la desigualdad en la distribución de las partidas que han denunciado, así lo afirma Jorge Herrera, presidente de la AMUPA.

Jueves 12

Los arrendatarios del Mercado Agrícola Central o Mercado de Abastos rechazan el aumento del canon de arrendamiento que les aplicará la Alcaldía de Panamá. Mediante un comunicado a la nación expresan que el aumento, al que los quieren someter las autoridades municipales sin ningún tipo de justificación, golpeará la economía de los panameños.

El alcalde capitalino, Bosco Vallarino, renuncia a su cargo alegando problemas de salud, pero en los medios circulan rumores de que esto se debió a presiones del ejecutivo. La salida de Vallarino deja a la cabeza del Municipio de Panamá a Roxana Méndez, de Cambio Democrático (CD).

El presidente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, también vicepresidente de la República, afirma ante los medios que el presidente Ricardo Martinelli amenazó e intimidó al alcalde para que renunciara a su cargo, y además envió amenazas a otros dirigentes opositores.

El diputado y asesor de la junta de la ciudad de Panamá, José Isabel Blandón, confirma que el alcalde Bosco Ricardo Vallarino y el presidente de la República, Ricardo Martinelli, mantuvieron una álgida reunión la noche del martes 10 de enero, en el Palacio de las Garzas. “En medio del acalorado encuentro, el mandatario pidió la renuncia a Bosco. De no aceptar, le dijo que se atuviera a las consecuencias”, expresa Blandón.

Viernes 13

La Asociación “Amigos de los Animales y la Naturaleza” convoca a una manifestación pacífica este domingo 15 de enero en el capitalino Parque Urracá, en avenida Balboa, para rechazar los espectáculos en los circos y exigir la aprobación del Proyecto 308, que castiga el maltrato animal y pone sanciones.

Juan Carlos Varela, presidente del Partido Panameñista, hace un llamado a los partidos políticos, sindicatos, sociedad civil, e inclusive a sus adversarios del PRD, a formar un frente pro defensa de la institucionalidad del Estado y la democracia. La Secretaría de Comunicación del Estado le responde de inmediato a Varela y tilda a la actuación como un mero acto politiquero.

Edgardo Voitier, representante de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) en la Mesa de Salario Mínimo, manifiesta que para exigir que se “haga justicia” a los funcionarios, comenzarán una serie de acciones junto con los otros gremios del CONATO. Este día inician con un piqueteo en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el día 20 de enero lo harán en la sede de la Cámara de Comercio.

El primer día de la alcaldía capitalina en manos de CD es una jornada de locos. Todos los cambios que se temieron ocurren en unas cuantas horas. Roxana Méndez, la nueva alcaldesa, asume su cargo, llega con personal de su confianza y pide de inmediato la renuncia de los 21 gerentes, subgerentes y directores de la institución, claves en la gestión de su antecesor, Bosco Vallarino. La crisis política desatada por la renuncia de Vallarino logra unir a la oposición en contra de las acciones del gobierno de Martinelli.

Sábado 14

El PRD denuncia ante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la transacción de la empresa Minera Panamá, de venta del 20% de las acciones del proyecto Cobre Panamá a Corea del Sur. “El MICI no puede avalar que el gobierno de Corea del Sur compre acciones de la empresa que explota los yacimientos de cobre en la concesión que abarca 13 mil 600 hectáreas en el distrito de Donoso, en Colón”, precisa el quinto subsecretario del PRD, Joaquín Vásquez.

Domingo 15

Ante la intención del gobierno de impulsar el desarrollo minero a cielo abierto, con la participación de gobiernos extranjeros, el dirigente del opositor PRD, Juan Carlos Navarro, reitera su rechazo a esta actividad ante el impacto social y ambiental negativo en áreas montañosas y comarcas indígenas. Las declaraciones de Navarro se hacen públicas durante una reunión en la comunidad de Tolé, provincia de Chiriquí, en donde habitantes de la comarca Ngäbe Buglé expresan su preocupación sobre el impacto negativo que tendría la minería a cielo abierto en esta reserva indígena.

Lunes 16

Obreros que trabajan en la ampliación del Canal de Panamá declaran una huelga de brazos caídos en la zona de Cocolí, provincia de Colón. Los trabajadores reclaman el pago de sus salarios, así como igualdad de sueldo, al aducir que a los extranjeros se les paga más del doble por el mismo trabajo.

Con pancartas en mano, un grupo de trabajadores denominado “8 de Julio” realiza abucheos como forma de protesta en contra del presidente de la República, Ricardo Martinelli, cuando este recorría las calles de Changuinola, durante una visita oficial. “Gobierno corrupto” y “Queremos respuestas” son algunas de las consignas de los trabajadores de las bananeras, que fueron reprimidos por las autoridades cuando protestaban en contra de la polémica Ley 30, que introdujo reformas al Código de Trabajo en 2010.

Martes 17

Habitantes del sector 10 de Gonzalillo, municipio de Alcalde Díaz, protestan por la venta del terreno en donde viven desde el año 1977. Toman la decisión de protestar frente al edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá, para entablar una conversación con la alcaldesa Roxana Méndez. Quieren tratar el tema que aqueja a estas familias, puesto que el día miércoles 18 de enero deberán desalojar sus viviendas.

Obreros que trabajan en la ampliación del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá se mantienen en huelga de brazos caídos, para exigir un mejor trato laboral. Los obreros reiteran que a los extranjeros se les da un mejor trato –salarial– y demandan al Grupo Unidos por el Canal (GUPC) un aumento de salario y mejores condiciones laborales, y el pago de horas extras y de salarios caídos.

Miércoles 18

Los trabajadores de la ampliación del Canal de Panamá continúan en huelga por tercer día consecutivo para exigir que se les brinden mejores condiciones laborales; argumentan que los extranjeros reciben mejor salario a pesar de realizar los mismos trabajos.

Jueves 19

A partir de esta semana, las principales comunidades que demandan el servicio de agua potable en la provincia de Colón se beneficiarán con el operativo de distribución del líquido mediante cisternas, informa Abdiel Cano, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), quien reitera el llamado al diálogo con los dirigentes de la costa atlántica. El anuncio llega luego de la protesta de los residentes de esa provincia, donde hubo 12 arrestos y enfrentamientos con los antimotines.

En contra de las reformas al código minero, se manifiestan en la plaza 5 de Mayo varios indígenas Ngöbe-Buglé. De esa manera se reactiva la protesta indígena, que luego se traslada hacia el recinto legislativo, donde esperan ser recibidos por los diputados de la asamblea.

Viernes 20

Trabajadores aglutinados en el CONATO realizan un piqueteo frente a la cámara de comercio de Panamá, en avenida Cuba. Los trabajadores exigen un mejor aumento al salario mínimo y una mejor calidad de vida. Advierten que si no hay respuesta del gobierno seguirán las protestas hasta que sean escuchados.

En medio de piquetes, abucheos y manoteos por el desalojo de unas 30 familias de la comunidad “Llano el Medio” de Nueva Gorgona, en Chame, ordenado por el alcalde Euclides Mayorga, el pleno del consejo aprueba una resolución solicitando a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) que suspenda la acción de desalojo hasta que se determine quién es el verdadero dueño de aquellas dichas.

Sábado 21

La ministra de Trabajo, Alma Cortés, confirma que ha llegado a su fin la huelga en la ampliación del Canal de Panamá por reclamos laborales. Después de seis días de huelga, obreros del GUPC, consorcio encargado de los trabajos, logran un acuerdo y terminan el paro. La propuesta final del gobierno fue de 3.96 dólares por hora para trabajadores calificados, y de 3.34 dólares por hora para los ayudantes en general.

Domingo 22

A pesar de las declaraciones de la ministra de Trabajo, Alma Cortés, aún no hay un acuerdo sobre el aumento de salario de los trabajadores de la ampliación del Canal de Panamá. La última propuesta

del gobierno establecía un salario mensual de 693.67 dólares para los trabajadores que se desempeñan como ayudantes generales, quedando un aumento de 90.47, mientras que para el personal calificado se fijó un salario mensual de 823.67 dólares, estableciendo un aumento de 91.52. Esto representa un aumento del 15 y 125, respectivamente. Pero los trabajadores se mantienen desmotivados ante la propuesta y aseguran que continuarán con las acciones si no reconsideran sus peticiones.

Lunes 23

Mientras que Minera Panamá S.A. está próxima a cumplir un mes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para su mina de cobre, los grupos ambientalistas del país no han tenido acceso a la resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) que fijó la medida. El nulo acceso lo confirman el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) a través de su abogada, Tania Arosemena, y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), por medio de la directora Ejecutiva, Alida Spadafora.

Martes 24

Un numeroso grupo de indígenas de la comarca Ngöbe-Buglé realiza una protesta con pancartas en mano a las afueras de la Asamblea Nacional de Diputados, en contra del proyecto de ley sobre la minería. Los ngöbes alegan que se está proponiendo una ley especial que prohíba la explotación minera, y establezca la cancelación de concesiones a proyectos hidroeléctricos, lo cual lesiona el artículo 48 de la Ley 10, que creó la comarca Ngäbe-Buglé.

Miércoles 25

El diputado del PRD, Juan Carlos Arosemena, muestra su rechazo al proyecto de Ley No. 402 sobre la Sala V, al alegar que el oficialismo tiene la intención de realizar una persecución contra las bancadas opositoras para abrir un compás hacia la reelección del presidente.

Jueves 26

Si no se inicia la discusión de la ley especial que prohíba la exploración y explotación minera en la comarca Ngöbe-Buglé, los indígenas saldrán a las calles el próximo lunes 30 de enero. Así lo manifiesta Alberto Montezuma, fiscal de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngöbe, quien además no descarta que para esa fecha se declare un cierre definitivo de la vía Interamericana hasta que la legislación que están demandando sea aprobada.

Viernes 27

Mientras la Asamblea Nacional de Diputados realiza sesiones en referencia a la Sala V, el rechazo a esta va en aumento. Incluso, señalan que es mejor una Corte Constitucional. Juan Jované, quien

anunció su candidatura independiente para la presidencia de la República en 2014, manifiesta su rechazo al proyecto de Ley No. 402, que reglamenta la Sala V de Garantías Constitucionales.

Sábado 28

Más de cien personas residentes de la comunidad Corredor Norte, en el distrito de Atalaya de Veraguas, amenazan con cerrar el camino e impedir el tránsito de vehículos durante los días de la romería en honor al Cristo Nazareno si el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no les cumple y construye una carretera de asfalto.

Domingo 29

Cuestionar las actividades mineras en Panamá tiene consecuencias graves. El Servicio Nacional de Migración impide la entrada al país a la investigadora canadiense Rosie Simms, quien estuvo en el país el año pasado haciendo una pasantía en el CIAM sobre derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo minero en la comarca Ngöbe-Buglé. Simms escribió dos artículos en contra de la actividad minera en Panamá, razón por la cual se le niega la entrada.

Lunes 30

La Asamblea Nacional decide suspender el segundo debate de la Sala V. La discusión se dio por terminada por la fuerte oposición de los grupos de la sociedad civil que se encuentran en el hemiciclo.

Los indígenas aglutinados en la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, cierran la vía Interamericana a la altura del cruce de San Félix. La acción se extendió por más de una hora, lapso que los manifestantes aprovecharon para incendiar neumáticos y ramas secas, y lanzar botellas de vidrio a la calle. Los indígenas solicitan que se reincorpore el artículo cinco, que fue eliminado del proyecto de ley especial antiminería en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

Las unidades antimotines se encuentran a la espera de los grupos indígenas que saldrán a protestar en diferentes puntos de la provincia de Chiriquí para pedir la eliminación del artículo cinco del proyecto de Ley 415, que establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngäbe Buglé. Otro grupo de antimotines se encuentra también en los sectores de Río Cobre, en Veraguas, para evitar que se cierre la vía.

Martes 31

Un grupo de indígenas de la comarca Ngäbe Buglé mantiene cerrado uno de los carriles de la vía Interamericana, a la altura de San Félix, en el oriente chiricano. Mientras tanto, una comisión oficial, encabezada por Jorge Ricardo Fábrega, ministro de Gobierno, y por el diputado Fernando Carrillo, llega a la gobernación de la provincia de Chiriquí. El grupo protesta para exigir la

eliminación del artículo cinco del proyecto de Ley 415, que establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la Comarca Ngäbe.

A nueve días de terminar el tercer paro de los trabajos del juego de esclusas del Canal de Panamá, un grupo de trabajadores del área de Cocolí realiza nuevos piqueteos. Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), declara que son los trabajadores que realizan excavaciones y movimientos de tierra quienes exigen el aumento salarial pactado en la mesa de negociación.

Glosario de siglas

ADALPA	Asociación de Alcaldes de Panamá
AMUPA	Asociación de Municipios de Panamá
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
ANATI	Autoridad Nacional de Administración de Tierras
ANCON	Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
APEDE	Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
CD	Cambio Democrático
CIAM	Centro de Incidencia Ambiental
CONATO	Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
FAD	Frente Amplio por la Democracia
FENASEP	Federación Nacional de Servidores Públicos
GUPC	Grupo Unidos por el Canal
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MICI	Ministerio de Comercio e Industrias
MOP	Ministerio de Obras Públicas
PRD	Partido Revolucionario Democrático
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” de la ciudad de Panamá.

Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.

Fuentes: A EVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red y Partido Alternativa Popular.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Panamá

Febrero 2012

Editada en junio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1090

**Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá**



Integrantes Marco A. Gandásegui
Azael Carrera

Fuentes A EVE Panamá, FRENADESO, Radio
Temblor, Kaos en la Red y Partido
Alternativa Popular

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Panamá

Cronología del conflicto social

Febrero de 2012

Miércoles 1

Los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé cumplen su promesa de mantener cerrada la vía Panamericana para exigir que se preste atención a la Ley Minera. El cierre total inició a las 3 de la tarde del martes 31 de enero, y aún en horas de la noche el tráfico se mantiene bloqueado con piedras, palos, alcantarillas y llantas incendiadas.

La defensora del pueblo Patria Portugal llega hasta el cruce de San Félix para buscar un acercamiento con los indígenas que exigen una ley especial anti minería, así como hacen representantes del legislativo y ejecutivo. La cacique general, Silvia Carrera, manifiesta que ya está cansada de diálogos que al final no terminan en nada y agrega que el cierre de la Interamericana continuará hasta que se atiendan sus demandas.

Un grupo de pacientes envenenados con dietilenglicol es sacado a la fuerza por la Policía Nacional de los cuatro paños de la vía Transistmica, frente al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS). Los policías cercan a los manifestantes, en su mayoría personas enfermas con el veneno, las ubican en la acera y crean una muralla humana para que no cierren la calle. Los manifestantes exigen un aumento en la pensión vitalicia y mejoras en la atención médica.

Jueves 2

El dirigente Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, confirma que unidades antidisturbios de la Policía Nacional arremetieron contra manifestantes indígenas que se mantenían apostados en el distrito de Tolé, en Chiriquí. Los indígenas, al enterarse del ataque policial, reprochan la situación y se arman con piedras y palos en el cruce de San Félix, sector donde está la mayor concentración indígena.

La secretaria de Asuntos Indígenas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) afirma que el presidente Ricardo Martinelli será responsable por la situación que se genere en la comarca Ngäbe Bugle. El comunicado acusa al ejecutivo de tratar de imponer a sangre y fuego su Ley Minera.

Federico Humberto Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), rechaza categóricamente el cierre de la vía Interamericana y solicita a las comunidades indígenas la búsqueda de espacios para expresar su opinión.

Viernes 3

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Arturo Alvarado, denuncia que indígenas mantienen secuestrados a 40 pasajeros de la ruta Tica Bus, en Viguí, provincia de Veraguas, limítrofe con Chiriquí. Alvarado alega que los indígenas no permiten que las autoridades les lleven agua, ni alimentos a los turistas. Alerta que los indígenas cometen un delito internacional al secuestrar a turistas de Costa Rica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá acusa al pueblo de ngäbe de capturar rehenes de procedencia internacional, y hace un llamado a respetar los derechos de los ciudadanos nacionales y extranjeros retenidos contra su voluntad en el área de San Félix, provincia de Chiriquí. Sin embargo, en horas de la noche, los medios de comunicación desmienten la postura del gobierno.

Sábado 4

El dirigente perredista Juan Carlos Navarro respalda la petición de los ngäbe buglés de que no haya minería a cielo abierto en esta comarca y precisa que no puede permitirse que el cierre de calle se haya extendido por seis días, ante el incumplimiento de lo acordado por parte del gobierno nacional. “Con el mayor respeto y cariño a la comunidad ngäbe, les solicito que se sienten a dialogar; y el presidente Martinelli tiene la responsabilidad de ir allá a San Félix, hoy mismo, para sentarse a dialogar con la dirigencia indígena, a fin de buscar una salida a la crisis”, precisa Navarro.

Un incremento tarifario de entre 25% y 30% en la facturación eléctrica provocaría la suspensión de los proyectos hidroeléctricos que actualmente están en construcción o en trámite, dentro o cerca de áreas comarcales, informa la Secretaría de Energía.

La Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE) denuncia que fue objeto de represión por parte de la Policía Nacional, que además retuvo a 10 de sus integrantes en una protesta magisterial, en solidaridad con el pueblo ngäbe sobre el puente de calle 7, en Santiago de Veraguas.

Domingo 5

El ejecutivo hace un llamado al diálogo y explica a sectores empresariales las consecuencias que tendría para el país aceptar la nueva propuesta de grupos indígenas de cancelar concesiones hidroeléctricas que actualmente están en construcción o en trámite, dentro o cerca de áreas comarcales. Cancelar las concesiones hidroeléctricas, frente a la constante alza del precio del petróleo, conllevaría un incremento tarifario de hasta un 30% en la facturación, informa el secretario de Energía, Juan Manuel Urriola.

Reportes periodísticos indican que los enfrentamientos en David, entre manifestantes y antimotines, dejan a una persona lesionada. Los indígenas abren paso para que una ambulancia lo traslade al hospital. Se presume que es el segundo indígena muerto, denuncian los dirigentes. La persona está encima de una mesa en un restaurante, prácticamente agonizando. Tenía una herida en la parte baja de la espalda, cerca de los glúteos. Grupos de la sociedad civil piden a Martinelli que acuda al llamado y atienda su deber de escuchar a su coordinadora, a su pueblo y a su cacique general Silvia Carrera, que cese las medidas represivas, de sometimiento, y la violencia contra el pueblo Ngäbe

Buglé. El Movimiento Democracia, Justicia y Libertad, que coordina la abogada y activista de derechos humanos Idalia Martínez, rechaza, de la manera más enérgica, la represión y ataque contra el derecho a la vida, por parte del gobierno nacional, contra los hermanos ngäbe buglé, uno de los pueblos originarios de la República de Panamá. El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, justifica la suspensión del servicio de telefonía celular en el área del conflicto con los ngäbes, en Chiriquí. En conferencia, Mulino explica que tenían información de inteligencia sobre un posible sabotaje en el área de las torres de telefonía celular, y a través de la autoridad reguladora se procedió con la cooperación de las cuatro compañías operadoras para suspender el servicio. El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, quien realiza el informe junto al ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, confirma la muerte de un indígena, pero desmiente que haya sido a manos de la policía. De esa manera refuta lo dicho por pobladores, quienes aseguran que la muerte se dio en enfrentamientos de las dos partes. De igual manera da un balance del número de heridos y detenidos: detalla que al menos 32 indígenas y siete policías resultaron heridos, mientras que 41 fueron retenidos.

Lunes 6

Diarios locales confirman que el agente de la Policía Nacional que utilizó un arma de fuego durante la represión a las protestas indígenas el domingo 5 fue separado de su cargo. Luego de la publicación de una imagen en la que se mostraba a un agente de la policía portando un arma de fuego, las autoridades que inicialmente negaron la utilización de armas letales en los eventos del oriente chiricano señalan que iniciarían una investigación. La información indica que aparte de la separación del cargo será sometido a la Junta Disciplinaria de la institución.

Miembros del Consejo Académico de la Universidad de Panamá anuncian que se mantendrán suspendidas las labores académicas y administrativas este martes 7 de febrero en todas sus instalaciones a nivel nacional, como medida de seguridad ante la situación registrada en diferentes partes del país. En un comunicado, se hace un llamado a las asociaciones, centros de estudiantes de facultades, escuelas, y a los secretarios generales de los grupos estudiantiles a una reunión este martes a las 10 hrs en el *campus* Harmodio Arias Madrid para dialogar sobre el reinicio de las actividades académicas y administrativas.

La organización *Human Rights Everywhere* (HREV), en un comunicado, denuncia “la violación de derechos humanos fundamentales por parte del gobierno de Panamá en la gestión de la crisis por las protestas indígenas relacionadas con la minería”. Señala que los informes disponibles y el material recopilado por sus voluntarios apuntan a que el gobierno, a través de la Policía Nacional, ha violentado, entre otros, el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal de los detenidos y al debido proceso, al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley. Además, ha violado los principios básicos de protección de los menores de edad.

Una turba de indígenas enardecidos incendia el cuartel policial del corregimiento de Volcán, en el distrito de Bugaba, en Chiriquí, en medio de las protestas por el rechazo a la Ley Minera. Los aborígenes, que trabajan en fincas agrícolas, mantenían la entrada de Volcán cerrada y se enfrentaron a los antimotines. Con un agente herido, los indígenas sacaron toda la papelería de la estación de policías rociándole combustible. Se trata del segundo cuartel de la policía panameña que es incendiado. El primero fue el de San Félix, también en Chiriquí.

Martes 7

En San Lorenzo, Chiriquí, los indígenas y el gobierno nacional firman el “Acuerdo San Lorenzo 1”, que pone fin a las manifestaciones contra la minera y la hidroeléctrica en la comarca Ngäbe Buglé. Es el fin de las protestas de los ngäbes, que bloquearon la vía Interamericana desde el martes 31 de enero, con 200 horas de manifestaciones en rechazo del proyecto minero. La Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Panamá expresa “muchas preocupaciones” por la situación de cientos de niños de la comarca Ngäbe Buglé, tras la protesta indígena con los antimotines por la Ley Minera. En una carta pública, la organización alega que los niños indígenas están sufriendo directa o indirectamente los efectos de una política de estado en donde no prima la conciliación y el diálogo. El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriou, acompañado del ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega y Luis Eduardo Camacho, secretario de Comunicación del Estado, en representación del órgano ejecutivo, se reúnen en Chiriquí para intentar establecer un diálogo. Afirman que el primer paso para abrir la negociación es restablecer la señal de telefonía celular. Se espera que en las próximas horas se concrete el diálogo entre el gobierno, la iglesia y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino.

El pleno del Consejo Académico ampliado, de la Universidad de Panamá, decide reanudar las labores administrativas en todas las instalaciones de la institución educativa a nivel nacional, a partir de este miércoles 8 de febrero. La estrategia, según dirigentes universitarios, es impedir que la universidad se sume a la protesta por los desmanes gubernamentales.

Miércoles 8

Grupos magisteriales, de trabajadores, estudiantes e indígenas protestan en las afueras de la Asamblea Nacional contra la Ley Minera. En la entrada principal hay una concentración, por lo que solo se puede entrar al recinto en vehículos. Alrededor de las 5 de la tarde llega la cacique general, Silvia Carrera, que fue recibida por los indígenas.

Alcaldes y representantes de corregimientos del país protestan frente al edificio de la Contraloría General de la República, para exigir que la institución proporcione fondos a sus juntas comunales para los proyectos comunitarios. Las autoridades realizan una marcha, que parte de la sede del PRD, continua hacia la Asamblea Nacional y se reúne con otro contingente que protesta en contra de la minería, con el cual avanzan hasta la contraloría.

Como parte de un acuerdo entre los representantes de la comarca Ngäbe Buglé y el gobierno, se libera a las personas detenidas durante las manifestaciones en la provincia de Chiriquí, en los distritos David, San Félix, Tolé y Volcán. De esa manera, se empieza a cumplir el acuerdo denominado San Lorenzo 1. Alrededor de unos 150 fueron retenidos por las autoridades por participar en las protestas en contra de las empresas mineras e hidroeléctricas.

Jueves 9

Aunque la firma del pacto San Lorenzo 1 logró romper el nudo gordiano que se había armado entre el gobierno y los miembros de la coordinadora ngäbe buglé, la calma no ha llegado a la región

comarcal, tras días de tormenta. La dirigencia aun no ha dado a conocer una cifra exacta sobre la cantidad de heridos y desaparecidos producto de los disturbios. Rogelio Montezuma, de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, asegura que se calcula en más de 200 personas. Continúan en la fase de recopilación de datos y no hay información exacta.

La cacique Silvia Carrera recorre por cerca de ocho horas el camino para reunirse con la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Diputados. De manera unánime, los diputados acuerdan reconsiderar un primer debate sobre el polémico Proyecto de Ley 415, y con él el análisis del artículo 5. Aunque la tensión disminuye en todo el país, hay protestas de menor intensidad. Afuera del Palacio Justo Arosemena, varios gremios se congregan en apoyo a los indígenas, como muestra de rechazo a las hidroeléctricas y exigiendo que se cumpla con lo consensuado con la comisión gubernamental.

Viernes 10

Los grupos indígenas hablan de un tercer muerto en los enfrentamientos entre antimotines y ngäbes del domingo 5. En horas tempranas, el cacique Celio Guerra, del Congreso Tradicional Ngäbe, informa que hay una tercera persona que habría muerto en el conflicto indígena, y que una niña fue violada por policías antimotines. El cuerpo de una indígena fue encontrado en estado de descomposición en San Félix, Chiriquí.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Marco González, asegura que dirigentes del PRD, del Partido Panameñista y del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) utilizan a los indígenas para promover un golpe de Estado. Las palabras de González surgen luego de la revelación de videos donde opositores, supuestamente, se coordinan con los indígenas ngäbes en la protesta contra la minería.

La cacique general, Silvia Carrera, manifiesta que “el gobierno no debe poner el poder económico sobre los intereses del pueblo”. La cacique vuelve a reiterar que en la comarca y áreas anexas su pueblo se opone a la construcción de hidroeléctricas, porque eso pondría en peligro al agua, un recurso necesario para ellos.

Oswaldo Vargas, del Movimiento 23 de Octubre, y Lucía Perea, representante de los usuarios en la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito, muestran su rechazo al aumento de 5 a 10 centavos en el abordaje, por parte de la administración de la Terminal de Transporte de Albrook. Consideran que lo que se debe dar es la eliminación por completo del pago de cinco centavos, porque los usuarios garantizan un negocio de por vida a una terminal que a esta alturas ya debe estar totalmente paga.

Un grupo de indígenas que se mantiene en vigilia en las inmediaciones de la Asamblea Nacional muestra su disgusto por la decisión de llevar las discusiones sobre el proyecto de Ley 415 a puertas cerradas. El pueblo ngäbe buglé exige de igual manera que las discusiones sean transmitidas por los medios de comunicación locales, porque es un tema que interesa a todos, incluso a nivel internacional.

Sábado 11

Los indígenas liderados por la cacique Silvia Carrera se preguntan dónde está el presidente de la República, Ricardo Martinelli, que desde los días del conflicto no ha dado la cara ni ha promovido un acercamiento con el pueblo ngäbe buglé. Nuevas versiones sobre mujeres indígenas presuntamente violadas por unidades policiales durante los enfrentamientos en San Félix dejan al descubierto que, más que tratarse de una especulación, pareciera acercarse a una realidad que a alguien no le gustaría que se hiciera pública. Se trata de la denuncia que hizo a los medios de comunicación una de las dirigentes indígenas, quien asegura que sí hubo menores de edad violadas por unidades policiales en el campamento ngäbe en San Félix.

El diputado oficialista y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Marcos González, denuncia la existencia de un plan para derrocar al presidente de la República, Ricardo Martinelli. Según González, quien dice tener pruebas de lo que denuncia, las recientes protestas indígenas son una de ellas.

Los ngäbe buglé mantienen su postura de rechazo a la construcción de hidroeléctricas, tanto en las áreas anexas como en el territorio comarcal. Se completa el tercer día de discusiones del proyecto de Ley 415 sin mayores avances. El ministro de Comercio e Industrias propone a los actores del debate un receso hasta el día lunes, para así tomar decisiones menos agitadas y que beneficien a ambos grupos.

Domingo 12

La cacique general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, dice que el presidente Ricardo Martinelli gobierna desde *Twitter* y le huye a los indígenas. La líder, desde su cuenta de *twitter*, le escribe al propio Martinelli que “no da la cara”. “Mi pueblo lleva días en las calles en condiciones extremas y él en su mansión gobernando desde su *Twitter*”, señala. Igualmente, la dirigencia comarcal declara al partido gobernante Cambio Democrático (CD) “*non grato*” en la comarca Ngäbe Buglé.

Los diputados de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprueban un receso hasta el miércoles 15, en el debate el Proyecto 415 sobre minería, estancado en el tema de las hidroeléctricas. Los integrantes de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesino pedían el receso, en medio de quejas por no tener asesores como su contraparte.

El presidente panameño, Ricardo Martinelli, advierte que llamará a *referéndum* si no se logra consenso en el tema de las hidroeléctricas, rechazado por los grupos indígenas ngäbes. Voceros del gobierno alegan que el acuerdo es sobre minería, pero los indígenas dan un no rotundo tanto a los proyectos mineros como a los hidroeléctricos en el área comarcal. El Ministerio Público (MP) no formulará cargos y liberará a todos los indígenas retenidos en las manifestaciones de San Félix, pero sus expedientes quedarán abiertos. Así lo establece una comisión integrada por el procurador de la nación, José Ayú Prado, la cacique ngäbe, Silvia Carrera, el gobierno y la Iglesia católica.

Lunes 13

La última encuesta de *Dichter & Neira* revela que la mayoría de los panameños rechaza el uso de la fuerza policial para despejar la vía Interamericana en la protesta de los indígenas contra la minería. El 71.8% opina que no estaba justificado, respondiendo a la pregunta “¿Cree usted que se justificaba o no se justificaba, por parte del gobierno, el uso de la fuerza para despejar la vía Panamericana?”.

Ante el receso declarado por la Asamblea Nacional, donde se indica que las discusiones sobre el Proyecto de Ley 415 continuarán el miércoles 15, la cacique de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, dice que su pueblo ya no resiste más. “Mi pueblo ya no resiste un día más. La dirigencia comarcal quiere que se agilicen las negociaciones, vamos para dos semanas y aun nada”, expresa la líder indígena a través de *Twitter*. A ocho días de los enfrentamientos, que dieron un saldo de dos muertos y cientos de heridos, los grupos indígenas vuelven a las calles en el distrito de Boquete. Más de 300 indígenas marchan en apoyo a sus dirigentes, que buscan llegar a acuerdos en la Asamblea Nacional sobre el artículo 5 del Proyecto de Ley 415. La constitución nacional, en su artículo 127, otorga a los indígenas el derecho a la propiedad y la disposición de las tierras de las áreas comarcales, las cuales establece bajo el régimen de propiedad colectiva. Según las declaraciones del abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, este artículo no deja lugar a dudas. Entonces, se pregunta por qué la insistencia del gobierno en disponer de las tierras comarcales para la explotación minera o instalación de hidroeléctricas u otras actividades en estas jurisdicciones, sin siquiera consultar a sus verdaderos dueños.

Martes 14

El pueblo ngäbe lleva más de una semana en las calles, en espera de una respuesta del gobierno, y hasta el momento el presidente no ha salido a dar una solución, alega la cacique Silvia Carrera en medio de una protesta pacífica frente a la Asamblea Nacional de Diputados.

Miércoles 15

El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, expresa su profunda preocupación por las denuncias formuladas través de los medios de comunicación por la cacique general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, relacionadas con el fallecimiento de Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez, las violaciones a los derechos humanos y la persecución durante y después de los enfrentamientos entre los indígenas y la policía. Varela indica que estos hechos son el producto de la falta de diálogo y de la forma irresponsable con la que el gobierno nacional ha manejado esta crisis.

Jueves 16

La dirigencia indígena da hasta este viernes al gobierno y a la Asamblea Nacional como plazo para que les agilicen el proceso del proyecto minero. El debate del Proyecto 415 sobre la minería se estancó en el artículo referente a las concesiones mineras y los proyectos hidroeléctricos. El

gobierno apunta a las hidroeléctricas como necesarias, para no encarecer la electricidad en Panamá, mientras que los indígenas piden que sus territorios sean excluidos de estas obras.

El Frente Sectorial Femenino del PRD expresa su repudio a los excesos y ultrajes cometidos por unidades de los antimotines de la Policía Nacional contra las indígenas ngäbes buglé, y anuncia que interpondrá las acciones legales correspondientes. “Repudiamos todos los vejámenes cometidos a las indígenas ngäbe buglé, y estamos preparando las denuncias penales contra las unidades policiales que cometieron estos actos”, precisa la doctora Eyra Ruíz, presidenta del Frente Femenino del PRD.

Un nutrido grupo de trabajadores recorre la avenida central de Penonomé, manifestándose contra el alto costo de vida. La protesta transcurre sin incidentes y custodiada por vehículos de la Policía Nacional.

Tras la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí, tanto familiares como la dirigencia indígena claman porque se haga justicia y se juzgue al culpable que le quitó la vida. Aunque el gobierno niega que durante los disturbios del pasado domingo 5 de febrero las unidades policiales utilizaran armas de fuego, informes a los que tiene acceso la prensa local confirman lo contrario.

Viernes 17

Los indígenas ngäbe vuelven a tomar los dos carriles de la vía Panamericana, provocando un bloqueo vehicular del transporte de carga, de buses de pasajeros y de carros particulares que se trasladan de la capital y de la provincia de Veraguas hacia Chiriquí y viceversa. Toribio García, dirigente del movimiento indígena, dice que la acción de protesta y el cierre total de la vía Panamericana es para hacerle saber al gobierno nacional que la cacique Silvia Carrera, su máximo líder, no está sola, y que tiene el respaldo de todo el pueblo ngäbe. Los representantes del gobierno nacional, la dirigencia de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino y la cacique general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, tras ocho días de conversaciones, no logran ponerse de acuerdo en el tema hidroeléctrico y firman un comunicado donde mantienen la cancelación de las concesiones otorgadas para la actividad minera en esa comarca y áreas anexas.

Sábado 18

Luego de la visita de la cacique general a Vigui, los indígenas apostados a orillas de la Interamericana señalan que se mantendrán en vigilia hasta que se reanude el diálogo. Toribio García deja saber que siguen reunidos y que estarán en conversación con la cacique general para definir si habrá otra posición en los próximos días. Más de 150 indígenas continúan a orillas de la vía Panamericana en espera del diálogo con el gobierno y, según Toribio García, en los próximos días estarán bajando más ngäbes para apoyar al movimiento. Silvia Carrera, cacique general de la comarca Ngäbe Bugle, aceptó levantarse de la mesa de diálogo y regresar el próximo 27 de febrero, porque el mediador José Luis Lacunza, arzobispo de la Iglesia católica, se lo solicitó debido a que no se podía afectar a terceros. La máxima autoridad de la comarca reitera que el comunicado que firmó no es un acuerdo, sino una oportunidad para el pueblo panameño que quiere festejar.

Domingo 19

La dirigente ngäbe Yanel Venado no recuerda con exactitud cuántos días lleva acampando en el parque José Antonio Remón Cantera, al frente de la Asamblea Nacional. Con ella está un centenar de indígenas de distintos puntos del país y el cansancio se siente en sus signos vitales y se refleja en sus rostros. Aún así, Venado sólo piensa en el próximo jueves, cuando la Asamblea Nacional reanude las sesiones, después de estos días de asueto por la celebración de los carnavales.

Lunes 20

Alberto Montezuma, dirigente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, manifiesta que mientras esperan que se reanude el diálogo se están preparando para sostener sus puntos sobre la minería y la hidroeléctricidad. En ese sentido, Montezuma anticipa que luego de una gira por varios puntos de la comarca se reunirá con la cacique general, Silvia Carrera, en Cerro Pelado.

Martes 21

La cacique general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, denuncia públicamente que la persiguieron en dos autos por la ciudad de Panamá, luego de que salió de la mesa de diálogo con el gobierno en la Asamblea Nacional. La líder, que ha puesto a la administración de Ricardo Martinelli en jaque en el tema hidroeléctrico, explica que, movilizada por la persecución del auto donde se desplazaba, el conductor se puso nervioso y chocó a la altura de la Plaza Edison, en la vía Tumba Muerto. Uno de los autos tenía la placa con número 719381. “No soy delincuente”, indica la cacique general.

Miércoles 22

Por cuarto día, indígenas de la comarca Ngäbe Buglé se mantienen a orillas del río Vigí, cerca de la vía Panamericana, en espera de que terminen los carnavales, tal como lo solicitó el mediador del conflicto, monseñor José Luis Lacunza. A su vez, Toribio García da a conocer que toda su gente ha estado en completa vigilia para hacerle entender al gobierno nacional que ellos aún continúan en alerta, porque no se les ha dado respuesta a su solicitud sobre la ley especial para la comarca.

Jueves 23

Rogelio Montezuma, presidente de la coordinadora, dice que la decisión de enviar o no a sus hijos a clases dentro de la comarca será adoptada este viernes en una reunión de evaluación que realizará la organización. Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifiesta que las clases en la comarca inician el 27 de febrero, como está previsto en el calendario nacional.

Viernes 24

Grupos indígenas se reúnen la mañana de este viernes en la casa de la cacique general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, a fin de analizar y determinar las acciones a tomar el lunes 27 de febrero, cuando se retome el diálogo con el gobierno en la Asamblea Nacional de Diputados. La dirigencia del pueblo ngäbe buglé ha hecho énfasis en la importancia de la unidad para lograr un objetivo común que beneficie no sólo a la comarca Ngäbe Buglé, sino a todo el país.

Sábado 25

El perredista Laurentino Cortizo señala que el gobierno ha subestimado el poder de negociación de la dirigencia indígena. Los ngäbes tienen excelentes negociadores, acota. Dice, además, que el gobierno, encabezado por Ricardo Martinelli, ha manejado mal la crisis que ha surgido con los indígenas que rechazan la explotación minera e hídrica en la comarca Ngäbe Buglé. Lo que ha demostrado esta administración es que no tiene un equipo base de prevención y administración de una crisis social. Mientras el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, ve con optimismo el reinicio del diálogo, el próximo lunes 27 de febrero, con la cacique Silvia Carrera y los miembros de la coordinadora indígena, en la comarca Ngäbe Buglé circulan rumores de una posible reunión entre caciques, que buscan desbancar a la cacique general. Edilberto Sánchez, presidente del Congreso General, confirma a los medios de comunicación que están tratando de ver si se puede realizarse la convocatoria, donde analizarían la situación. El ex presidente de la república, Martín Torrijos Espino, dice que es injusto el argumento de algunos funcionarios del actual gobierno, de culpar a las poblaciones indígenas que se oponen al desarrollo de las hidroeléctricas de una posible escasez de energía que a futuro pudiera afectar a Panamá y generar un aumento de precios.

Domingo 26

El perredista Juan Carlos Navarro reitera este domingo su propuesta de crear el Ministerio de Asuntos Indígenas, que tendría como misión incorporar a la comarca Ngäbe Buglé a un proyecto de desarrollo que respete las normas ambientales. “Que este diálogo se dé respetando la ley, sin tranques, en paz, sin represión, sin violencia y que seamos un país libre, democrático, con una educación de primer mundo y una prosperidad que también llegue a la comarca”, puntualiza. Por su parte, el vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, pide por el conflicto entre el pueblo indígena y el gobierno, señalando que espera que el diálogo se imponga ante cualquier enfrentamiento innecesario y que los estudiantes puedan iniciar sus clases en paz. “Que se respeten las leyes de la Comarca, el derecho que tiene el pueblo Ngäbe de vivir en paz en sus tierras, pues el país tiene capacidad de generar esta energía en otras áreas sin afectar las comarcales que, por ley, le pertenecen al pueblo Ngäbe” acota.

Voceros de las comunidades ubicadas en las riberas del río Tabasará denuncian que más de 500 habitantes resultarían afectados durante la construcción del último embalse de la fase uno del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que impulsa la empresa Generadora del Istmo S.A. (GENISA). “No es cierto que las áreas anexas están deshabitadas, como lo han dicho voceros de GENISA. Aquí vive mucha gente que depende no solo de lo que les brinda la madre tierra, sino también el río Tabasará”, precisa Manolo Miranda, residente de la comunidad indígena de Kias.

Al menos siete caciques del Congreso Comarcal de Ngäbe Buglé exigen que el gobierno y los diputados los incluyan en las negociaciones para establecer los márgenes de la central hidroeléctrica en su territorio. Los dirigentes muestran una posición paralela a la que sustentan la cacique general, Silvia Carrera, y la delegación indígena, que se han mantenido firmes en la mesa de debate con el gobierno.

Lunes 27

Al reiniciarse las conversaciones en la Asamblea Nacional, el gobierno presenta una propuesta dirigida a crear una mesa de diálogo para la elaboración y adopción de un plan de desarrollo integral de las diferentes comarcas indígenas. La propuesta es explicada a los indígenas por Jorge Ricardo Fábrega, quien encabeza el equipo negociador del ejecutivo.

Los indígenas mantienen ocupado un carril de la vía Interamericana a la altura de Viguí, para presionar al gobierno en la mesa de diálogo sobre el tema minero. También hay cierres en el cruce de San Félix, en la vía que va de la ciudad de David hacia la ciudad capital y el sector de El Salado.

Obreros del SUNTRACS, en la provincia de Colón, cierran por 30 minutos la vía Panamá-Colón, en la intersección del corregimiento de Sabanitas. La manifestación se produce como apoyo a los indígenas y su lucha por la conservación de los recursos naturales.

Indígenas cierran la vía hacia Llano Ñopo, impidiendo que docentes de aproximadamente 30 escuelas puedan pasar. Son más de seis corregimientos a los cuales no se tiene acceso. Según Toribio García, dirigente indígena, el cierre hacia Llano Ñopo se mantendrá hasta que el gobierno nacional les dé una respuesta ante la ley especial de la comarca.

Martes 28

El ministro de la Presidencia de Panamá, Jimmy Papadimitriu, indica que los cierres de calles realizados por grupos vinculados a la coordinadora indígena y a la cacique ngäbe, Silvia Carrera, son una violación al Acuerdo de San Lorenzo. Las palabras del integrante del gobierno de Ricardo Martinelli surgen ante el cierre de la vía Panamericana, protagonizado por grupos indígenas, quienes piden acuerdos sobre el tema hidroeléctrico, debido a que dicen sentirse ridiculizados.

Indígenas llegan hasta las oficinas del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en Tolé, a gritar consignas en contra del gobierno nacional. Un grupo de 30 indígenas realiza una caminata desde Tolé hasta Viguí y se detiene en Barro Blanco, donde realiza un mitin para después continuar con su caminata hacia el puente Viguí, escenario del cierre de la vía Panamericana.

Miércoles 29

Miembros del partido gobernante CD apuntan a un acuerdo con la comarca Ngöbe Buglé en medio del estancamiento en el tema hidroeléctrico. El diputado Raúl Hernández, presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, explica que la propuesta de la Coordinadora por la Defensa

de los Recursos Naturales y Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino los pone en un punto cero, como si no hubieran iniciado el diálogo con todas las concesiones.

Indígenas en Viguí se mantienen en el campamento, en constantes conversaciones para definir las acciones a seguir en las próximas horas. Lo decidido en esa reunión tiene como objetivo ejercer presión sobre al gobierno para que dé una respuesta a su solicitud sobre la ley especial para la comarca y áreas anexas.

Glosario de siglas

AEVE	Asociación de Educadores Veragüenses
CCIAP	Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
CD	Cambio Democrático
CSS	Caja de Seguro Social
GENISA	Generadora del Istmo S.A.
HREV	<i>Human Rights Everywhere</i>
MP	Ministerio Público
PRD	Partido Revolucionario Democrático
SINAPROC	Sistema Nacional de Protección Civil
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” de la ciudad de Panamá.

Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.

Fuentes primarias: A EVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red y Partido Alternativa Popular.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Panamá

Marzo 2012

Editada en julio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1115

**Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá**



Integrantes A. Gandásegui
Azael Carrera

Fuentes A EVE Panamá, FRENADESO, Radio
Temblor, Kaos en la Red, Partido
Alternativa Popular.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Panamá

Cronología del conflicto social

Marzo de 2012

Jueves 1

El ministro de Gobierno y representante del ejecutivo en el diálogo minero con los indígenas, Jorge Ricardo Fábrega, sostiene que se mantienen en el diálogo pues ha sido la instrucción del mandatario Ricardo Martinelli. Acompañado por el diputado Raúl Hernández, presidente de la Comisión Legislativa de Comercio, el ministro asegura que el viernes 2 se presentarán a la mesa de conversaciones y reiterarán su propuesta de suspender por 15 días el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Juan Vallarino, jefe de Seguridad de la Asamblea Nacional, confirma que usaron balas de goma en el incidente registrado, donde indígenas que se encontraban protestando fueron reprimidos por el personal de seguridad de la asamblea. El incidente puede poner en peligro las negociaciones que se están efectuando. Tras él, los indígenas denuncian que los originarios se pintan de guerra. Hablan de bloqueos indefinidos. Los heridos ngäbes atendidos por la Cruz Roja Panameña esta tarde son: Felipe Caballero, guardia comarcal, herido de bala en la pierna derecha; Eduardo Carpintero, herido en el pecho, y Omedo Pita, quien reporta heridas en el cuerpo y el cuello. La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y las autoridades tradicionales quieren una respuesta a su contrapropuesta, de lo contrario evaluarían su participación en el diálogo minero en la Asamblea Nacional. Queda claro que la salida es retirarse de la mesa. Los indígenas ngäbes no sólo exigen la cancelación del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, sino que además se cancele la concesión de los proyectos Tabasará II y Chan II. La posición gubernamental es que se adopte la propuesta de suspender por 15 días el proyecto de Barro Blanco, el plan de desarrollo integral para las comarcas y el no otorgamiento de las concesiones mineras.

Viernes 2

El diálogo entre la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y el gobierno deja la Asamblea Nacional y se traslada a la Ciudad del Saber, en Fuerte Clayton, ciudad de Panamá. Las conversaciones iniciarán el sábado 3 de marzo en las oficinas de Naciones Unidas a partir de las 10 am. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) será mediadora de las conversaciones entre los grupos. Rogelio Montezuma, presidente de la coordinadora indígena, explica que el diálogo no será televisado. El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, manifiesta que luego de haber avanzado en la mesa de diálogo, los indígenas están a punto de perder todo debido a la intransigencia que han tenido. Cada vez que se reinicia el diálogo, los ngäbes van agregando puntos que no estaban contemplados en el acuerdo San Lorenzo 1. Sin embargo, Papadimitriu es desmentido por la Iglesia católica, que en un comunicado explica que los nuevos puntos que menciona el ministro fueron ampliamente contemplados en el citado acuerdo.

Sábado 3

Al menos 15 tipos de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno se han identificado en la protesta que los indígenas han llevado a cabo contra la minera y las hidroeléctricas. El documento fue elaborado por un equipo de investigación de grupos, como la Comisión de Justicia y Paz, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), en una gira que comenzó el viernes 10 y terminó el lunes 13 de febrero de 2012, mismo que es presentado este día en los medios de comunicación. El informe expresa que existen indicios de que el Estado panameño, además de utilizar medios y procedimientos para el control de multitudes y disturbios civiles, empleó tácticas militares y armas letales, o armas no letales de forma letal. Tanto el gobierno como la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos Ngäbe-Buglé, y la cacique general de la comarca, Silvia Carrera, acuerdan hablar con los medios de información solamente en comunicados conjuntos. Igualmente, los miembros del diálogo, los observadores, mediadores y facilitadores se abstendrán de dar declaraciones sobre los acuerdos de manera unilateral. Tras 25 días sin lograr un acuerdo conceptual, el diálogo entre la coordinadora indígena y el gobierno nacional se muda a los salones de la Ciudad del Saber. También hay un cambio de facilitador. Esta labor, que hasta el pasado jueves estuvo en manos de la Iglesia católica, la realizará la delegada de la ONU, como lo habían pedido los ngäbes.

Domingo 4

La Asamblea Ciudadana presentará ante la Asamblea Nacional un anteproyecto para regular el uso de la fuerza de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. El abogado, Alejandro Ganci, vocero del grupo de la sociedad civil, expresa que luego de los incidentes entre indígenas y antimotines se debe entrar a regular el uso de la fuerza. El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco no deja de ser la manzana de la discordia entre indígenas y gobierno, incluyendo las áreas anexas, donde los grupos ngäbe se oponen a la ejecución de este tipo de proyectos. Dos subcomisiones son creadas, una discutirá el artículo de la Ley 10 –que hasta el momento permite el desarrollo del proyecto minero en los territorios indígenas pasando por encima de sus leyes tradicionales–, y el otro abordará el tema de Barro Blanco. Representantes del gobierno se muestran positivos con el reinicio del diálogo.

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) rechaza de manera enérgica la querrela por delitos contra el honor presentada por el administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah, misma que fue acogida por la Fiscalía Octava de Circuito en contra de la periodista Mónica Palma. El consejo critica el desconocimiento de Shamah de la Carta Magna y del Código Judicial al querellar a la comunicadora, sin tomar en cuenta que no constituyen delitos contra el honor las críticas hechas a los funcionarios.

Lunes 5

El diálogo minero avanza entre indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé y el gobierno: se acuerda suspender de forma temporal el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en Chiriquí, mientras se hace un peritaje independiente. Se hará una revisión del manejo del uso del suelo del proyecto. Además, la obra debe ser sometida con posterioridad a referéndum en la respectiva circunscripción

comarcal. Por su parte, la Alianza Ciudadana Pro Justicia presenta ante el Ministerio Público el informe que detalla el indicio de al menos 15 tipos de violaciones a los derechos humanos en la protesta de los indígenas contra la minera y las hidroeléctricas en Chiriquí y áreas aledañas. La abogada, Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dice que el informe es avalado por la mayoría de las organizaciones de derechos humanos en Panamá. La investigación confirma la denuncia hecha por un diario de la localidad, sobre la violación de por lo menos dos mujeres indígenas, una de las cuales presuntamente es menor de edad.

Transportistas detenidos y el cierre de la calle en el sector de Este marcan el inicio del Metrobús en el corregimiento de Las Mañanitas. El cruce de Las Mañanitas con Belén se encuentra totalmente cerrado, luego de que los conductores de los diablos rojos mostraran su descontento por el inicio del servicio del Metrobús. A este respecto, manifiestan que el nuevo sistema de transporte se ha impuesto, pese a que ellos todavía se encuentran en funciones, pues no les han pagado sus indemnizaciones.

Martes 6

La cacique de la comarca Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, declara que confía en que se logrará un acuerdo entre su pueblo y el gobierno nacional, con la mediación de la ONU, que prestó su sede en Panamá para la continuación del diálogo. No obstante, las conversaciones quedan en receso hasta el lunes 12 de marzo. Durante ese período los originarios aprovecharán para trasladarse hacia Llanos de Tugrí, cabecera de la comarca Ngäbe-Buglé, para conmemorar los 15 años de la Ley 10, que creó la reserva indígena. El proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco será suspendido hasta que se realice un peritaje sobre su plan de manejo ambiental. El peritaje que, aseguran las partes, será independiente, incluirá un estudio de impacto ambiental y de uso de suelo de la hidroeléctrica, afirma el comunicado leído por monseñor José Luis Lacunza, mediador de las conversaciones. Pero la mesa de diálogo no ha determinado cuánto tiempo tardará, ni cuándo empezará ese estudio. Tampoco anuncia cuán determinante será en la decisión de frenar o no la planta permanentemente, tal como lo exigen los indígenas.

Miércoles 7

Alrededor de 60 indígenas *wounaan* protestan ante las oficinas centrales de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) por la violación a las disposiciones forestales vigentes, como la tala ilegal y la apertura de caminos sin los correspondientes estudios de impacto ambiental, así como el trasiego de árboles de la especie *cocobolo* desde el este de la provincia de Panamá.

Grupos indígenas apostados en las orillas de la vía Interamericana aseguran que no aceptarán la decisión de su cacique, Silvia Carrera, de suspender el diálogo con el gobierno hasta el lunes 12, y que no dejarán de cerrar la carretera. Exigen a Carrera reunirse con ellos y explicarles por qué tomó esa decisión, afirma Francisco Miranda, coordinador de la base cero en San Félix.

Ante las quejas por el incremento constante del precio del combustible, el reembolso de 300 dólares por pintar los taxis de amarillo y el trámite de las placas, cerca de 30 representantes del transporte selectivo sostienen una reunión con el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Juan Pablo Mora, para manifestarle su inconformidad. Una caravana sale a las 10am de la

Ciudad Deportiva “Irving Saladino” hasta las instalaciones de la ATTT en Los Pueblos, donde los transportistas presentan su solicitud.

Jueves 8

Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe, vuelve a solicitar durante el Congreso Ngäbe-Buglé, en el que se celebran los quince años de la creación de la comarca, un sobreseimiento definitivo para todos los miembros de esta agrupación a los que se les haya levantado algún proceso, tras los enfrentamientos registrados el pasado domingo 5 de febrero. El sobreseimiento de los indígenas está incluido en los compromisos que adquirió el gobierno al firmar el texto pactado en el acuerdo San Lorenzo 1, dice Montezuma.

Viernes 9

La Asamblea Ciudadana realiza un llamado a todos los sectores democráticos del país para repudiar las acciones recientes de la Policía Nacional y exigir la separación inmediata de su cargo al director, Gustavo Pérez, para que se inicie la investigación y el procedimiento para su destitución por violar la ley y atentar contra la personalidad interna del Estado.

El vicepresidente, Juan Carlos Varela, afirma que Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional, es el responsable de recular el proceso democratizador de la fuerza pública. “Este es un intento más del director Gustavo Pérez para politizar la Fuerza Pública, donde las lealtades no están a la institución, ni a los oficiales de carrera ni al país, sino que es una lealtad personal al presidente de la República sin ningún tipo de equilibrio y balance”, explica Varela.

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, podría presentar su renuncia de manera pública, según afirma una fuente allegada a él. No obstante, el presidente, Ricardo Martinelli, y Mulino, se han reunido para considerar las consecuencias que podría traer su renuncia.

Las damas panameñas celebraron el Día Internacional de la Mujer con una marcha para exigir respeto a todas las de su género en Panamá y el mundo.

Sábado 10

Toribio García, dirigente de los Ngäbe-Buglé apostados a la orilla del río Viguí, en los límites de Veraguas con Chiriquí, manifiesta que temen por la seguridad de la cacique, Silvia Carrera, mientras se lleva a cabo una reunión con alrededor de 14 bases, y anuncian en un comunicado la ruptura inmediata de la mesa de diálogo, además de tomar medidas de presión, ya que es la única alternativa para lograr el objetivo planteado ante la comisión de gobierno. También exigen la presencia del presidente de la República en el lugar del conflicto, para resolver la petición de los Ngäbe-Buglé, así como la incorporación del Artículo 5, tal y como se presentó en el acuerdo de San Lorenzo 1, que es la esencia de la Ley 415. La cacique de la comarca, Silvia Carrera, llega esta mañana al cruce de San Félix para reunirse con un grupo de indígenas, quienes demandan que el diálogo se traslade a esa área, ya que aseguran que este se ha dilatado en la ciudad capital.

Trabajadores mineros y personas de las comunidades del área de influencia de los proyectos de oro y cobre en Donoso, el norte de Coclé y otras regiones del país, que regentan las empresas mineras *Petaquilla Gold* y *Minera Panamá*, realizan una marcha en Penonomé. Los caminantes coreaban consignas en contra de la minería en Panamá.

Ante la imposición de la voluntad del director de la policía, Gustavo Pérez, subalterno del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino presenta su renuncia al cargo. La decisión es consecuencia del apoyo que el presidente Ricardo Martinelli le da a Pérez, echando para atrás una decisión del gabinete. La sociedad civil ha reaccionado, exigiendo la separación de Pérez de la Policía Nacional, por violar la Constitución y generar una crisis institucional.

Domingo 11

Luego del receso solicitado por la cacique general de la comarca Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, para levantarse de la mesa de diálogo minero e ir a celebrar los 15 años de creación de la comarca, los grupos indígenas apostados en las diferentes bases a nivel nacional deciden retomar las acciones de lucha en la calle. La base de Viguí toma un carril de la vía Panamericana como medida de presión sobre el gobierno nacional, para que no retrase más las conversaciones y se defina la ley especial para la comarca. Los indígenas no descartan el cierre total de la carretera.

Lunes 12

Indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé manifiestan que, luego de un consenso con las distintas bases en todo el país, se llegó a la conclusión de terminar con la mesa de diálogo que mantienen sus dirigentes con el gobierno nacional sobre los temas de la minería y las hidroeléctricas. Pablo Miranda, vocero indígena que se encuentra en los predios de la Asamblea Nacional, dice que esta postura se debe a que se han dado demasiadas dilataciones. En ese sentido, solicitan que se reincorpore el Artículo 5 del proyecto de Ley 415, que busca prohibir la minería y las hidroeléctricas en la comarca, incluyendo las concesiones actuales.

Martes 13

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, le pide a José Raúl Mulino, actual ministro de Seguridad Pública, que no renuncie al cargo, expresó Luis Eduardo Camacho, secretario de Comunicación del Estado, al finalizar la sesión del Consejo de Gabinete. Igualmente, varios ministros de Estado le han pedido a Mulino que reconsidere su decisión de renuncia irrevocable, presentada mediante una carta a Martinelli el pasado viernes 9 de marzo.

La Asamblea Ciudadana, grupo mayoritario de la sociedad civil, reitera su preocupación por la designación de Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional, para presidir el Consejo de Seguridad del Estado. Mediante un comunicado, expresa que un funcionario que durante el ejercicio de sus funciones al frente de la policía ha vulnerado los derechos humanos y ha actuado en abierta violación a la constitución nacional, no puede mantenerse en la estructura que se relaciona con la seguridad del Estado.

Los indígenas liderados por la cacique general suplente, Mijita Andrade, cierran la vía Interamericana a la altura del cruce de San Félix, en el oriente Chiricano. Exigen que la cacique general, Silvia Carrera, y los miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe, les informen de los avances del diálogo. Antes de esto, amarraron al presidente del Congreso Regional de Ño Kribo, Willy Jiménez, a quien acusan de traidor. Los indígenas advierten que el cierre se mantendrá hasta las 7 de la noche, aunque no descartan que en próximos días se den nuevas acciones. En la Fiscalía Segunda Superior del Tercer Distrito Superior continúan las investigaciones sobre la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí, quien falleciera el pasado 5 de febrero durante los enfrentamientos entre indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé y unidades antidisturbios de la Policía Nacional en el cruce de San Félix. La fiscal, Nedelka Díaz, informa que están tratando de traer a todas las personas que conocen los hechos; sin embargo, la funcionaria del Ministerio Público reconoce que las investigaciones se llevan a cabo con mucha dificultad, ya que los indígenas aún se encuentran en vigilia, y no quieren abandonar sus bastiones de lucha y trasladarse a la sede de la fiscalía a rendir declaración.

Los directivos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), en Chiriquí, manifiestan su preocupación por el destino que pueda tener la mesa de diálogo, donde se discute la ley especial que prohíbe la exploración y explotación minera en la comarca Ngäbe-Buglé. Leonel Sanjur, presidente de este gremio en la provincia de Chiriquí, insta a las partes a llegar hasta el final y no abandonar las conversaciones, ya que sostiene que es la única forma viable de resolver esta problemática.

Miércoles 14

Conductores de transporte selectivo llegan al cruce de San Félix, y proceden a quitar troncos, piedras y otros objetos que yacían en la vía Interamericana, mientras un grupo de indígenas mantenía cerrado uno de los carriles de dicha carretera. Los taxistas, acompañados por miembros de la comunidad, manifiestan que ya no permitirán más el cierre de la vía interamericana por parte los indígenas. Sin embargo, expresan claramente que sus acciones no deben ser entendidas como si estuvieran de acuerdo con la minería o los proyectos mineros.

Indígenas cercan sobre un puente a los transportistas que quitaron las barricadas en Vigúí, mientras apedrean a los carros. Sólo dos vehículos del gobierno nacional lograron pasar. El resto de los conductores tuvo que retroceder.

Los transportistas de la Cámara Nacional de Transporte dialogan con los indígenas para que la vía Interamericana, cerrada a la altura del puente sobre el río Pacora, sea reabierto, pero no lo consiguen. En ese sentido, el dirigente transportista Esteban Rodríguez manifiesta que el gobierno debe buscar una solución pronta para que no se afecte a terceros.

Estudiantes, padres de familia y educadores del Centro Educativo de Alanje protestan por las malas condiciones en las que se encuentra el plantel, según denuncian. Abandonan sus aulas de clases y cierran parcialmente la calle frente a la escuela, exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación una respuesta inmediata para las múltiples necesidades que enfrentan. Nereida Muñoz, profesora de ese centro educativo, manifiesta que desde hace más de un año no cuentan con trabajadoras manuales, por lo que la higiene de los salones y baños del plantel deja mucho que decir.

Jueves 15

Los indígenas ngäbe-buglé vuelven a cerrar la vía interamericana a la altura del puente sobre el río Pacora, como medida de protesta. Llantas encendidas, piedras y troncos son algunos de los objetos que obstaculizan el libre tránsito en ese punto de la provincia de Panamá. Los indígenas piden que no se dilate más el diálogo sobre los temas de minería e hidroeléctrica, que hay entre los dirigentes ngäbes y el gobierno nacional, en la sede de la ONU de la Ciudad del Saber. Los ngäbe-buglé mantienen el cierre parcial de la vía Interamericana a la altura del puente sobre el río Pacora en el área al Este de la provincia de Panamá. No obstante, han habilitado dos carriles: uno de ida y otro de venida, luego de que los transportistas amenazaran con enfrentamientos contra los indígenas, al señalar que no permitirían que los sigan perjudicando, porque la situación les genera pérdidas cada vez que cierran esta importante vía. Por su parte, abogados de los indígenas de la comarca, que han realizado varias protestas contra el gobierno, acudirán al Centro de Recepción de Denuncias de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, para interponer una acusación sobre el dirigente transportista, Esteban Rodríguez. La denuncia de los abogados se fundamenta en las declaraciones dadas por Rodríguez el miércoles 14, donde manifestó que si los indígenas no abrían la vía Interamericana a la altura del puente sobre el río Pacora iba a haber muertos, porque pasarían los camiones y autobuses en medio de la protesta para despejar la carretera, sin importar quien estuviese al frente.

Viernes 16

La cacique general de la comarca Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, niega haberse vendido al gobierno tras el acuerdo alcanzado entre los funcionarios y los indígenas para cancelar los proyectos mineros y consultar la construcción de futuras plantas hidroeléctricas en territorios de las etnias. Afirma que es mentira que ha recibido 15 mil dólares y dos vehículos. Al mismo tiempo, denuncia que el mandatario, Ricardo Martinelli, no dejó que el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, representante del ejecutivo en las conversaciones, firmara el acuerdo que prohibía el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Así, tras varios días de reuniones en la Asamblea Nacional, y luego en la sede de la ONU, en la Ciudad del Saber, los indígenas y el gobierno logran ponerse de acuerdo sobre el Artículo 5 del proyecto de Ley 415, que contempla un régimen especial para la protección de los recursos hídricos, ambientales y minerales de la comarca. Se establece que los indígenas de esa etnia reciban el 5% de la facturación anual de los proyectos que se realicen, los cuales también deberán dar un 25% de puestos de trabajo, en el área de personal no especializado, a habitantes ngäbes y/o campesinos. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, dice sentirse contento por el acuerdo alcanzado entre su gobierno y los indígenas para cancelar los proyectos mineros y consultar la construcción de futuras plantas hidroeléctricas en territorios de las etnias.

Sábado 17

“El gobierno ha querido dividir al grupo diciendo que el Barro Blanco no iba y luego que se suspenden los trabajos por 15 días, pero después salen diciendo que Barro Blanco va porque va. Eso es lo que tiene al pueblo en la calle, porque hoy dicen una cosa y mañana hacen otra”. Así lo expresa la cacique general de la comarca Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, en una visita realizada a la ciudad de Santiago, en Veraguas. Según la líder indígena, el propio gobierno tiene la culpa de que el pueblo ngäbe haga los cierres de vías, por las tantas versiones que se dicen del proyecto

hidroeléctrico Barro Blanco. Asegura que la comarca espera que se suspendan los trabajos por parte de la empresa. Con escepticismo, sorpresa y repudio reciben algunos dirigentes de las bases indígenas los acuerdos alcanzados por la coordinadora. Mediante un comunicado, el presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo Ngäbe-Buglé, Celio Guerra, plasma esta inconformidad y manifiesta su rechazo alegando que no se ha logrado nada nuevo.

Domingo 18

Desde la instalación de la mesa de diálogo, el futuro del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco sigue siendo incierto. La mega obra se ha convertido en el nudo gordiano de las negociaciones en las que hasta ahora ninguna de las partes quiere dar su brazo a torcer. Por un lado, la dirigencia indígena ha mantenido su posición de suspender en su totalidad el proyecto hidroeléctrico, mientras los representantes de la empresa Genisa intentan por todos los medios defender la obra y explicar sus bondades. En medio de las negociaciones y la tensión sobre el futuro de las mismas, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, reiteraba: el proyecto de Barro Blanco va. La cacique general de la comarca Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, inicia a partir de hoy una jornada de divulgación sobre los acuerdos alcanzados en la primera mesa técnica donde se discutía la redacción del Artículo 5. Asimismo, Carrera adelantará los avances que lleva la segunda mesa técnica, en la que se discute el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. La cita será en el distrito de Tolé, donde se espera que estén presentes los dirigentes de todas las bases.

Lunes 19

El presidente de la república, Ricardo Martinelli, advierte que no permitirá más cierres de calles, por lo que hace un llamado al pueblo indígena para que cesen las protestas que han realizado en los últimos días; hecho que ha causado pérdidas millonarias a productores, entre otros. El presidente pide también que se respete y acate lo que dice la dirigencia Ngäbe-Buglé, cacique Silvia Carrera, máxima autoridad de la comarca. Esto, tras los llamados de la líder para que no se cierren las vías, los cuales no han sido atendidos. Por su parte, monseñor José Domingo Ulloa, también hace un llamado a los indígenas y pide que haya paz. Los indígenas ngäbe-buglé, que forman parte del Congreso Tradicional que dirige el cacique Celio Guerra y la cacique suplente Mijita Andrade, manifiestan en conferencia de prensa en la ciudad de Panamá que se oponen al acuerdo alcanzado por el gobierno, la coordinadora y la cacique Silvia Carrera. No obstante, eso no quiere decir que haya una división del movimiento indígena, sino que se da a conocer la posición de quienes rechazan los proyectos mineros e hidroeléctricos en la comarca y áreas anexas. Indígenas reunidos en Hato Chamí, emiten un comunicado en el que exigen a la cacique general suplente, Mijita Andrade, y al grupo que lidera, que cesen los cierre de calles, toda vez que puede afectar los avances del diálogo. El llamado surge tras las reuniones que se dieron este fin de semana en diversos puntos de la comarca.

Martes 20

Cansados de implorar por al menos tres años la reparación de la calle que conduce a Mendoza, Herrera y La Represa, en el distrito de La Chorrera, a los residentes de estas comunidades se les agota la paciencia y cierran esa vía durante ocho horas. Esa vía fue destruida con la construcción de

la Planta Potabilizadora de Mendoza, en 2009. Los afectados exigen una reparación de forma rápida.

La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprueba en primer debate el proyecto de Ley 415, sobre los recursos minerales e hídricos en la comarca Ngäbe-Buglé, que conlleva los nuevos artículos consensuados en la mesa de diálogo entre el gobierno y los indígenas. La discusión es rechazada por grupos indígenas que no apoyan a la cacique general, Silvia Carrera.

Miércoles 21

Una orden de desalojo por un corregidor destituido es el detonante para que pescadores y unidades del control de multitudes –antimotines– de la Policía Nacional, se enfrentaran en la entrada de la playa Santa Clara, en el distrito de Antón. La batalla entre policías y civiles comienza alrededor de las 9am, cuando unos cien pescadores y residentes de la comunidad playera deciden cerrar la vía Interamericana para expresar su molestia por una orden que los obligaba a abandonar las tierras donde han vivido por décadas.

El joven indígena Franklin Javilla, de la comunidad de Chichica, quien fue herido de bala por la Policía Nacional en las protestas contra la minería en Chiriquí, murió la noche del martes, anuncia Celio Guerra, presidente del Congreso General Ngäbe-Buglé Tradicional. Javilla había sido herido en los enfrentamientos el domingo 5 de febrero en Tolé. La discusión del polémico Artículo 5, correspondiente a la explotación y exploración de los recursos minerales en la comarca, vuelve a la Comisión de Comercio, pero ahora subdividido en ocho artículos. Esta fragmentación es producto de los acuerdos pactados en la mesa de diálogo, cuya redacción culminó el 15 de marzo, tras más de mes y medio de estar siendo consensuado por la dirigencia indígena y el gobierno.

Jueves 22

Un grupo de indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé, liderados por Toribio García, proceden a cerrar nuevamente en su totalidad la vía Interamericana a la altura de Viguí, entre el límite de la provincia de Chiriquí y Veraguas. La situación ha obligado una vez más a que cientos de conductores queden sin libre tránsito en el área, producto del pesado tráfico que se ha formado. Los ngäbes bloquean la vía con troncos y piedras, manifestando de esa manera su rechazo a cualquier proyecto minero o hidroeléctrico en la comarca y áreas anexas. Indígenas ngäbes que mantienen una vigilia en la Asamblea Nacional inician una huelga de hambre indefinida para exigir que se declare a la comarca libre de hidroeléctricas y minería. El pleno de la Asamblea Nacional aprueba de forma unánime el proyecto de Ley 415, que crea un régimen especial en materia minera, hídrica y ambiental para la comarca. De esa forma, se cierra el tema de la minería y de las hidroeléctricas, dice ante el pleno de diputados el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega. El saldo fue de tres indígenas muertos, varios heridos y acusaciones de violación sobre mujeres ngäbes, tras los enfrentamientos del domingo 5 de febrero, cuando los antimotines procedieron a abrir la vía Panamericana en varios puntos del interior.

Viernes 23

La cacique general de la comarca indígena Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, reconoce que hubo logros en el acuerdo que se alcanzó con el gobierno del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y puso fin a un diferendo entre las partes sobre el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. El acuerdo no permitirá la explotación de proyectos mineros en la región aborígen. La representante comarcal Silvia Carrera, expresa en entrevista que no es cierto, como señalaron algunos críticos, que se haya vendido en el proceso para alcanzar este consenso. Ante las acusaciones de algunos grupos indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé, la cacique general reitera que no se ha vendido ni negociado el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesinos, manifiesta que con la ley aprobada es un hecho que la minería en la comarca pasa a ser “caso cerrado”. En ese sentido, Montezuma hace un llamado a los que dicen haber sido traicionados por la coordinadora y la cacique general, Silvia Carrera, para que de una vez por todas finalicen los cierres de calles. “Nuestra dirigente nos ha vendido a la empresa extranjera. La cacique general, Silvia Carrera, y la coordinadora nos han sentenciado, no solo a hidroeléctrica y minería, sino a todas las que quieran hacer dentro de la comarca”, dice el dirigente indígena Toribio García. Agrega que el ministro Fábrega salió riendo contento, porque ellos ya tienen la puerta abierta para hacer lo que les dé la gana dentro de la comarca.

A pesar de la intervención de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, en enero de 2012 durante el conflicto entre aproximadamente 4 mil obreros y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), los trabajos de ampliación en el Canal de Panamá vuelven a detenerse. Esta vez, unos 500 obreros que trabajan en la construcción de un cauce de acceso al Canal de Panamá, uno de los proyectos enmarcados en la ampliación de la vía interoceánica, negocian con el consorcio encargado de la obra varias peticiones que los llevan a iniciar una huelga indefinida.

Sábado 24

Una delegación de indígenas denuncia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), los abusos de que fueron víctimas durante las protestas contra la minería y las hidroeléctricas. La delegación, encabezada por Leónidas Quirós, asesor legal del Congreso Wounnan, reclama al gobierno que respete el derecho a la propiedad de las tierras colectivas en las que residen. Las denuncias incluyen la muerte de dos indígenas, producto de la represión policial en los últimos días. El gobierno panameño también tuvo su representación en una comisión encabezada por el director de Asesoría Legal de la Cancillería, Vladimir Franco.

Domingo 25

Si bien con la aprobación en el tercer debate del proyecto de Ley 415 en la Asamblea Nacional se cerró un capítulo de la ancestral lucha por la defensa de los recursos naturales que ha mantenido la población ngäbe-buglé, aún quedan cabos sueltos. Así lo expresa la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesinos. Esto no tiene nada que ver con las discusiones de la segunda mesa técnica respecto al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Va más allá: se centra en el segundo punto del pacto San Lorenzo 1, firmado entre la

dirigencia indígena y el gobierno, el miércoles 8 de febrero, en el que se acordó indemnizar a las víctimas y a los familiares de los muertos por los disturbios.

Lunes 26

A partir de este día tiene vigencia el nuevo régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales de la comarca Ngäbe-Buglé. Se trata de la Ley 11, que establece un régimen para la protección de los recursos en el área comarcal. Esta es promulgada en la *Gaceta Oficial* y es el resultado de casi un mes de acaloradas discusiones entre los ngäbes y el gobierno, la cual ordena la cancelación de todas las concesiones para proyectos mineros, así como para la alteración del cauce o cabeza de los ríos comarcales y la apropiación privada de los afluentes dentro del territorio ngäbe.

Martes 27

Jóvenes del corregimiento de Sabanitas, en la provincia de Colón, cierran los cuatro carriles de la vía Panamá - Colón, para exigir una investigación por la venta de los terrenos donde está ubicado un cuadro de fútbol de propiedad pública.

Miércoles 28

El frente creado por cientos de habitantes de Veracruz, que se oponen a siete concesiones para la explotación de canteras en el Cerro Cabra, ubicado en ese corregimiento, gana su primer asalto en esta lucha. Y es que el alcalde de Arraiján, Manolith Samaniego, anuncia que el municipio bajo su dirección solicitará que Cerro Cabra sea declarado área protegida y monumento histórico.

Jueves 29

Pese a que en 2011 la ATTT autorizó un aumento de 21% en el precio del pasaje a taxistas y transportistas del interior del país, debido al alto costo del combustible, en este 2012 el sector vuelve a pedir otro ajuste o un subsidio. Rafael Reyes, dirigente de transporte selectivo, manifiesta que si el gobierno no atiende la petición de aumento en la tarifa estarían obligados a tomar medidas. Reyes indica que esperan una respuesta de la ATTT, ya que han presentado varias propuestas para buscar una solución a los problemas que se presentan a la hora de trabajar.

Los malos olores que provienen del Cementerio Municipal de Santiago acaban con la paciencia de los residentes cercanos al lugar, quienes exigen a la alcaldía de la capital veragüense acabar con este problema que los afecta desde hace años.

Viernes 30

Aumento de precio en las tarifas del transporte selectivo por las frecuentes alzas del combustible, alto costo de vida, competencia desleal con los taxis piratas, falta de pago de indemnizaciones y

poca seguridad en horarios nocturnos son los problemas que aquejan a los transportistas del sector selectivo de la capital y el interior, quienes le exigen a la ATTT les dé pronta respuesta. Si no, tomarán medidas en el asunto.

Sábado 31

Trabajadores de Panama Ports Company S.A. realizan un paro de labores en los muelles, reclamando un aumento del 30% en sus salarios y mejores condiciones de trabajo. Denuncian que no les pagan a tiempo y que si sufren accidentes las familias no son compensadas, por lo que piden un aumento salarial acorde con los trabajos que desempeñan.

Glosario de siglas

ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
APEDE	Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
CEASPA	Centro de Estudios y Acción Social Panameño
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNP	Consejo Nacional de Periodismo
DIJ	Dirección de Investigación Judicial
GUPC	Grupo Unidos por el Canal
OEA	Organización de Estados Americanos
ONU	Organización de las Naciones Unidas

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” de la ciudad de Panamá.

Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.

Fuentes: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red y Partido Alternativa Popular.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Panamá

Abril 2012

Editada en julio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1134

**Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá**



Integrantes Marco A. Gandásegui
Azael Carrera

Fuentes AVE Panamá, FRENADESO, Radio
Temblor, Kaos en la Red y Alternativa
Popular.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Panamá

Cronología del conflicto social

Abril de 2012

Domingo 1

Desde el viernes 30 de marzo, el Puerto de Balboa se encuentra paralizado por una protesta de trabajadores. La directora de Trabajo de Panamá, Ada Romero, destaca que la ministra de Trabajo, Alma Cortés, participará en una cita, donde también deben acudir los directivos de la concesionaria portuaria, quienes aún no se han pronunciado públicamente sobre el conflicto laboral. Los trabajadores reclaman un aumento del 30% en su salario, el pago de horas extraordinarias, respeto de la jornada laboral y los descansos obligatorios, y mayor seguridad, entre otras peticiones.

Lunes 2

Rommel Troetsch, de *Panama Ports Company S.A.*, manifiesta que el paro que mantienen los trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal, los principales de la región, es un paro de amenazas. Así lo expresa en los medios de comunicación al asegurar que los trabajadores han vandalizado las instalaciones y dañado equipos importantes. Troetsch advierte que, de seguir esa actitud por parte de los huelguistas, la Panama Ports Company no irá a una mesa de negociación.

Los técnicos en enfermería podrían irse a paro de 48hrs prorrogables, el próximo 11 de abril, luego de que se decidiera contemplar esa acción durante una asamblea general de la Asociación de Técnicos de Enfermería. Además se aprueban manifestaciones desde el lunes 9 de abril, y una concentración en la sede del Ministerio de Salud (MINSAL) para el 10 del presente, si el gobierno continúa dilatando el pago del ajuste salarial que exigen.

La dirigencia indígena inicia la divulgación de la nueva Ley 11 que ofrece protección a los recursos naturales de la comarca. La encargada de iniciar esto es la cacique Silvia Carrera. En la primera presentación del documento oficial se dan cita, además de la cacique, el sacerdote Adonai Cortés y los miembros del pueblo ngäbe, así como de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales. La Ley 11 de 2012 establece, aunque de manera confusa, un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales dentro de la comarca Ngäbe-Buglé.

Los trabajos de la Línea 1 del Metro de Panamá podrían verse afectados luego de que los obreros dedicados a la fabricación de dovelas –anillos de concreto que se utilizan para cubrir los túneles– manifestaran que siguen en paro como medida de presión tanto para mejorar la situación laboral como para equiparar los salarios.

Martes 3

Los 5 mil técnicos de enfermería no están dispuestos a seguir ganando menos del salario mínimo hasta el 2013, fecha que la comisión evaluadora fijó para cumplir con el incremento salarial que el ministro de Salud, Franklin Vergara, les prometió pagar este año. En 2011, tras varios meses de negociaciones, los técnicos lograron que Vergara emitiera dos resoluciones en las que se estipuló un

nuevo salario: 550 dólares mensuales para los técnicos con estudios universitarios y 500 dólares para los que no tienen formación superior. Sin embargo, esto no se ha cumplido.

En una decisión encontrada, los trabajadores de Panama Ports Company acuerdan levantar la huelga, resolución que no los deja a todos contentos. La suspensión indica que las negociaciones con la empresa se lleven a cabo en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

Miércoles 4

Casi el 91% de los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé no están convencidos con la recién aprobada Ley 11, que protege a la zona prohibiendo la minería, así como la explotación y/o exploración de los recursos naturales. Así lo manifiesta el dirigente indígena Liborio Miranda, quien asegura que hay disgusto, específicamente por el Artículo 9 de esa ley especial, que establece que los afectados tendrán derecho a compensación previa si se sufren daños, afectaciones o son trasladados a consecuencia de proyectos hidroeléctricos.

Jueves 5

La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Panamá presenta su análisis sobre la situación política del país. Según el documento, hay una fuerte percepción ciudadana de que no existe la separación de poderes. Por el contrario, el ejecutivo ha venido concentrando mayor poder con el fenómeno de los diputados, los alcaldes y representantes trásfugas, obligados a renunciar para obtener una mayor partida económica.

La ley que restringe a los Estados extranjeros o a alguna otra institución semioficial extranjera para obtener concesiones mineras en Panamá es sancionada por el presidente Ricardo Martinelli. Se trata de la moción 13 del 3 de abril de 2012, que revive las normas sobre minería que desaparecieron en 2011, tras la abolición del Código de Recursos Minerales.

Viernes 6

Carlos Gordón, representante de los trabajadores que construyen los anillos de acero que se usan para recubrir los túneles la Línea 1 del Metro, informa que la huelga sigue, aunque las negociaciones continúan entre la empresa y los trabajadores aglutinados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) en las oficinas del Metro en Curundú.

Trabajadores del proyecto Isla Melones obstruyen la vía que conduce al puerto de Vacamonte, en reclamo por la falta de condiciones laborales. Exigen incrementos salariales y herramientas de seguridad.

Sábado 7

El Movimiento Popular Unificado (MPU) condena la detención del jefe del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Francisco Torres, en el aeropuerto de Tocumen, mientras hacía escala de un viaje proveniente de México. Según Torres, fue detenido por agentes panameños y estadounidenses. Mientras tanto el comunicado, firmado por el MPU, señala que el Estado panameño está en un proceso acelerado de militarización.

El alcalde de Barú, Franklin Valdés, reitera la denuncia de que continúan los problemas de escasez de agua en ese distrito. Valdés expresa que las potabilizadoras reciben agua del río Chiriquí Viejo y San Bartolo, los cuales se ven afectados cuando las hidroeléctricas embalsan el agua.

Domingo 8

La Asociación de Productores de Chiriquí solicita al gobierno nacional que preste mayor atención al sector agropecuario. Hernán Cortés, presidente de la organización, expresa que durante la pasada campaña electoral se prometió que la cadena agroalimentaria daría prioridad a la producción nacional por encima de los productos del extranjero.

Lunes 9

Se retoman las negociaciones entre el MITRADEL, la empresa Panama Ports Company y sus empleados, quienes el jueves 29 de marzo se declararon en huelga. En el 2009 y el 2010 los empleados portuarios exigían la creación de un sindicato que respondiera a los intereses de los trabajadores, la empresa excusa que ya existe uno. Ada Romero, directora de trabajo de MITRADEL, explica que la mediación continúa con la presencia de la ministra Alma Cortés. Según Romero, las negociaciones han tenido buenos resultados, sin embargo hay trabajadores que no se muestran contentos desde que se decidió frenar con la huelga el lunes 2 de abril.

Técnicos de enfermería que laboran en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) inician acciones de protesta demandando un ajuste salarial. La acción de protesta, a orillas de la vía Transístmica, se da pese a que los técnicos y el Ministerio de Educación (MEDUCA) llegan a acuerdos sobre varios puntos para mejoras de la escala salarial. Según el dirigente de los técnicos, Carlos Peralta, se lograron consensuar siete de los ocho puntos presentados. Sin embargo, sorprende el anuncio de que la escala salarial se hará efectiva hasta el 2013, manifiesta.

Desde que inició el nuevo sistema de transporte Metrobús, los panameños siguen esperando el servicio en lugares improvisados, a la intemperie, expuestos al sol y la lluvia. Así lo considera la dirigente de la Asociación de Usuarios, Esperanza Mena, quien ante esta situación manifiesta que urge la construcción de paradas.

Una comisión de pescadores de playa La Pacora viaja hasta Penonomé para entregar un escrito que contiene seis peticiones para proseguir el diálogo y evitar el desalojo de sus territorios, los cuales, argumentan, han habitado por varias generaciones. Sin embargo, el gobernador de la provincia, Carlos Núñez Fábrega, no sale a recibirlos.

Martes 10

Los técnicos y auxiliares de enfermería de Panamá decretan un paro de labores por 48 horas prorrogables desde las 12:01 del miércoles 11 de abril a nivel nacional. La medida obedece a una demanda por ajuste salarial, que han estado exigiendo al MINSA. Tras una reunión en la sede de este organismo, las partes no logran un acuerdo y los manifestantes trasladan su protesta a los predios de la presidencia de la República. El ministro de Salud, Franklin Vergara, indica que los ajustes se harían efectivos en el primer o segundo semestre de 2014. Los trabajadores del sector de la salud alegan que eso no cumple con sus expectativas.

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, controla la Asamblea Nacional de Diputados y otros importantes órganos del Estado. Además ahora busca manejar el Tribunal Electoral, así lo considera el presidente del Partido Popular (PP), Milton Henríquez, según el cual la situación pondría en peligro las elecciones generales de 2014, por lo que le solicita al mandatario aprovechar la coyuntura y permitir que la asamblea discuta el texto consensuado sobre las reformas electorales tal y como se aprobó, para que el ambiente que está “encrispado” con peleas, cambie.

Miércoles 11

Barro Blanco, el tema que sigue causando diferencias entre el gobierno y los indígenas ngäbes, no se ha dado por terminado. Debido a ello, se efectúa una nueva reunión en la mesa técnica que quedó pendiente, tras la conclusión del diálogo de los indígenas con los representantes del gobierno. El futuro del proyecto hidroeléctrico no fue incluido dentro de la Ley 11, que aisló el negocio hidroeléctrico y minero de la comarca Ngäbe-Buglé.

El alto costo del combustible comienza a convertirse en la peor pesadilla para los pescadores de Puerto Caimito, por ello alegan que el negocio está dejando de ser rentable. Según los pescadores artesanales, la situación se agrava sobre todo en el tiempo de veda, en el que tratan de sobrevivir saliendo a áreas cercanas. Además, se quejan de que el gobierno, lejos de suministrarles algún tipo de incentivo, lo que hace es mantener sobre ellos una permanente persecución por parte de Recursos Marinos, que les decomisa las redes, que por ley están prohibidas para los pescadores artesanales.

Julissa Rodríguez, especialista del Hospital Santo Tomás quien participó en la discusión del Proyecto 349, el cual creó la Asociación Público Privada (APP) en la Concertación Nacional para el Desarrollo, dice que la presentación del nuevo proyecto fue básicamente el mismo. Rodríguez sostiene que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó el documento con las reformas, pero no presentó las comparaciones punto por punto de los dos proyectos. Lo que pudo ver Julissa en la sustentación del funcionario del MEF fue una repetición de los cambios que ya se habían incluido en el acuerdo para poner fin a la huelga: eliminar los temas de salud y educación del régimen de la APP.

Alrededor de 80 personas de la comunidad de Santa Catalina, en el distrito de La Mesa, cierran un carril de la vía Panamericana para exigir la construcción de una carretera que lleve a su pueblo. Digna González de Pineda, una de las moradoras, dice que son 8km de camino y hace mucho tiempo que solo han recibido promesas, y a la fecha no ven señales de que se les construya esta importante vía. Ante la protesta, el director provincial del Ministerio de Obras Públicas en Veraguas, Raúl Arosemena, da a conocer que la entidad ya realizó la evaluación para construir ese

camino, por lo que se cuenta con toda la información necesaria para sacar a licitación el proyecto este mismo año.

Jueves 12

Transportistas de Chiriquí, Coclé, Herrera, Colón y Darién amenazan con un paro de labores los días 19 y 20 de abril, si no se logra una reunión con el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Juan Pablo Mora, para tratar el tema del ajuste a las tarifas del pasaje.

La entrada de 650 mil quintales de arroz levanta el nerviosismo en los miembros de la Asociación de productores de Arroz de Veraguas (APAVE), quienes manifiestan que no están de acuerdo, por lo que piden al gobierno que reconsidere esta decisión. Según APAVE, el gobierno está dando beneficio a un solo sector, y está abandonando totalmente a la mayoría de los productores; situación que no puede ser permitida.

Se cumplen 48hrs de suspensión de labores, y los integrantes de la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos de Enfermería (ANPATE) esperan que el ministro Franklin Vergara les presente una nueva propuesta, de lo contrario decretarán huelga indefinida. De los 5 mil técnicos y auxiliares de enfermería que tiene el MINSA y la CSS, sólo 350 no apoyaron el primer día de paro.

Bernabé Duarte, presidente del Consejo de Transporte del Interior (COTRADIN), asegura que los altos costos de operaciones están llevando a este sector a una situación caótica. Las declaraciones del dirigente se dan durante una reunión de trabajo que efectúa el consejo en Chiriquí. Duarte detalla que las constantes alzas en los precios del combustible hace insostenible la actividad, al tiempo que lamenta que aún la ATTT no haya aprobado las tarifas tal y como se había acordado.

Viernes 13

Unidades de control de multitudes arrojan gas pimienta a los técnicos, quienes decidieron cerrar la calle luego de conocer que la reunión pactada a las ocho de la mañana con las autoridades del MINSA fue suspendida. Los técnicos consideran que están siendo burlados. La huelga que mantienen los técnicos desde el pasado 11 de abril tiene como punto central la demanda de un ajuste salarial.

Los trabajadores de la ampliación del Canal de Panamá, ubicados en Cocolí, decretan un paro de labores en demanda a una mayor seguridad para realizar sus funciones, luego de que uno de los trabajadores falleciera en la madrugada. Héctor Hurtado, dirigente de los trabajadores, manifiesta que la huelga es un acto de solidaridad por la muerte del trabajador Luis Guardia, quien se desempeñaba como mecánico en el proyecto. Agrega que la muerte de Guardia se da justo después de que representantes de los obreros denunciaran en la Administración del Canal de Panamá (ACP) la inseguridad en la que laboran.

Un grupo de indígenas ngäbes protesta frente a la Corte Suprema de Justicia para que se le dé curso a la denuncia que presentaron por violación a la autonomía comarcal.

Sábado 14

Héctor Hurtado, miembro del SUNTRACS, manifiesta que debido a la muerte de Luis Guardia se declara un paro de 24 horas. Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS, revela que los trabajadores presentan un pliego de peticiones para ser negociadas a partir del lunes 16 de abril en las instalaciones del MITRADEL, y así ponerle un alto a la inseguridad. Entre las quejas se ubica la falta de equipos de protección personal y la instalación de carpas y mallas protectoras, además de otros aspectos.

Moradores del pueblo de San José, en la provincia de Los Santos, cierran la vía que conduce a los distritos de Pocrí y Tonosí como medida de protesta, frente a la falta de abastecimiento de agua potable, pues ya son varios meses los que esta comunidad ha sufrido con la falta del vital líquido. Alejandro Cedeño, morador de San José, indica que el cierre de calles es la única forma en que las autoridades escuchan.

Moradores de la comunidad de Jagüito de Antón hacen barricadas sobre la vía que da acceso a su comunidad y a fincas de producción de arroz, sandías y melones, en las cercanías de empresas privadas. Exigen mejorar el camino, pues por él transitan a diario equipo y maquinaria pesada que afectan la ruta para estudiantes, taxis y particulares.

Domingo 15

Coacción e intimidación es lo que están enfrentando los técnicos de enfermería en los hospitales, así lo denuncia Carlos Peralta, presidente de la ANPATE. Peralta señala que a los compañeros becados de la licenciatura los están amenazando con quitárselas si apoyan el paro. La huelga que inició desde el pasado 11 de abril aún continúa.

Los técnicos de enfermería que demandan un ajuste salarial marchan desde el Complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias” hacia el Hospital Santo Tomás, donde sus dirigentes se reunirán con el director del MINSA y de la CSS, Franklin Vergara y Guillermo Saez Llorens respectivamente. Sin embargo, el director de la CSS anuncia que no dialogarán con los manifestantes mientras estos mantengan el paro, además de mencionar que se tomarán medidas como el descuento de salario a quienes no trabajen, porque se está poniendo en peligro la vida de los pacientes que buscan atención médica.

Un grupo de trabajadores del Corredor Norte abandona las garitas en Tinajitas para protestar por una indemnización, tras la venta de la importante vía. Abdiel Meneses, secretario general de Trabajadores del Corredor Norte y Sur, expresó que los manifestantes exigen un diálogo con los representantes de la empresa, porque cada empleado solicita su dinero.

Los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé, luego del cese de las manifestaciones y cierres en la Vía Panamericana, hacen de conocimiento público el regreso a sus tierras y el comienzo de un proceso de consulta sobre la recién aprobada ley de minería. Celio Guerra, presidente del Congreso General Ngäbe-Buglé, indica que están realizando visitas a todos los que pertenecen a la etnia para que cada uno conozca lo que se aprobó y, luego de esto, será el propio pueblo quien decida si se regresa a la lucha y a las protestas.

Martes 17

Cansados por la falta de agua potable desde hace tres años, los residentes de Juan Pablo II del corregimiento de El Arado, en La Chorrera, cierran la vía sobre el puente del río Trapichito. En la protesta, los moradores exigen la presencia de las autoridades y del dueño de la promotora, que según ellos, valiéndose de publicidad engañosa, les vendió casas que no valen el precio que pagaron. En Juan Pablo II hay aproximadamente 300 casas y viven al menos mil personas, sin contar las nuevas residencias que se están construyendo. Al problema del agua se suman otros inconvenientes, como las malas condiciones de las calles, casas en mal estado, falta de áreas verdes para deporte y ausencia de paradas de autobuses para los habitantes.

Cerca de 15 vuelos son afectados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, debido a que más de 90 empleados de la Compañía Panameña de Aviación (COPA) declararan un paro de labores. Cristóbal Sousa, secretario del Sindicato de Empleados de Líneas Aéreas de Panamá, informó que los trabajadores del área de limpieza de las aeronaves y del manejo del equipaje, exigen a COPA mejores condiciones laborales. Los empleados también denuncian que la empresa ha aumentado la carga laboral, sin embargo los salarios siguen igual.

El viceministro del MITRADEL, Darío Falcón, reitera el llamado a los trabajadores de los corredores para regresar a sus puestos de trabajo y facilitar el proceso de negociaciones con la empresa. Además, asegura que el MITRADEL continuará con la mediación hasta que haya paz laboral. “Es importante que para establecer una mesa de diálogo las partes cedan, por eso hacemos un llamado a la cordura por el bienestar de todos, para que le demos una imagen diferente al país”, expresa Falcón.

Jueves 19

Trabajadores y representantes de la empresa que administra el sistema de cobros del Corredor Norte logran, con mediación del MITRADEL, llegar a un acuerdo que pone fin a la huelga, y reanudan el cobro en las casetas. Uno de los acuerdos deriva de que pronto el cobro será a través de tarjetas, por ello quienes trabajen en las casetas serán removidos a otras funciones dentro de la nueva Empresa Nacional de Autopista. En ese caso, a quienes decidan renunciar se les pagará una indemnización, mientras que a los que continúen se les otorgará un bono, manifiesta el vocero de los trabajadores del Corredor Norte, Abdiel Meneses.

Alrededor de 25 obreros que trabajan en la construcción del edificio que albergará la denominada Ciudad Judicial de Penonomé paralizan sus labores en la millonaria obra. Exigen se les pague el salario correspondiente al décimo tercer mes, pues el lunes 16, cuando llegaron al proyecto y esperaban recibir su pago, administrativos de la empresa constructora Arcada S.A. les dijeron que no tenían liquidez para desembolsar los 12 mil dólares correspondientes. Los trabajadores afirman que no reanudarán sus labores hasta que se les haga efectivo el pago, por lo que esperan una pronta respuesta de la empresa.

Viernes 20

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es blanco de críticas por parte de gremios periodísticos panameños, tanto en la red social como en medios internacionales. El gobernante ha logrado unir a las organizaciones periodísticas de Panamá en una sola causa: reprochar la humillación al periodista Hugo Enrique Famanía, de *RPC Televisión*. Le solicitan que ofrezca disculpas.

Sábado 21

El cierre por una hora de la vía Interamericana es la acción de protesta organizada por la Asociación de Funcionarios de la Salud (AFUSA), frente al Hospital “Luis Chicho Fábrega” en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas. Más de cien funcionarios administrativos que trabajan en las distintas entidades del Ministerio de Salud deciden cerrar la vía como acción de protesta para que el ministro Franklin Vergara atienda su solicitud de ajuste salarial, el pago de viáticos y la suspensión de los despidos injustificados, entre otros.

Domingo 22

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) denuncia que el activista Jean Carlos Fuentes, del Frente Amplio por la Democracia (FAD), fue detenido en el Mercado Público de Colón. Según los hechos, el detenido participaba en la campaña de inscripción de adherentes del nuevo partido político en formación. El colectivo responsabiliza al gobierno de Ricardo Martinelli por cualquier situación que afecte la integridad física de Fuentes.

Lunes 23

La Red de Voces Libres de Panamá, vía comunicado, deplora y califica de “atentados contra la libertad de expresión” a las acusaciones que el presidente Ricardo Martinelli lanzó en conferencia de prensa sobre el periodista Hugo Famanía, aludiendo a una pasada adicción, cuando este le cuestionaba del caso Lavitola. El grupo expresa su enérgico rechazo a los viles ataques realizados hacia el periodista, y añade que Martinelli pretendía eludir su responsabilidad frente a todos los panameños por las graves denuncias que se están realizando en el ámbito internacional por casos de corrupción.

Los gremios periodísticos hacen un llamado a todos los colegas de la pluma, organizaciones civiles y a la comunidad panameña, para que asistan a la marcha de paz, apoyo y solidaridad el martes 24 de abril. La protesta tiene como objetivo la defensa de la libertad de expresión e información, y el derecho a la honra y al respeto.

La AFUSA no descarta acciones de protesta en esta semana, que incluyen cierres de calles para exigirle al ministro que cumpla con los acuerdos firmados.

Martes 24

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, enfrenta una protesta que es cubierta a nivel internacional. La Marcha por la Dignidad y el Respeto al Periodismo Panameño es divulgada por la cadena internacional *CNN*. Las agencias de prensa difunden el hecho y los medios extranjeros lo reproducen.

Vestidos de negro y con pancartas en defensa de la libertad de expresión, se encuentran reunidos en las afueras de la Basílica Menor de Don Bosco, en Calidonia, periodistas y miembros de la sociedad civil. La marcha se convoca luego del ataque que hiciera el presidente, Ricardo Martinelli, al periodista Hugo Famanía. A pesar de que el mandatario pidió a Famanía una disculpa, la marcha seguirá porque los ataques a los periodistas han sido constantes, considera la presidenta del Colegio de Periodistas, Grissel Bethancourt.

Luego de tres semanas de estar sin agua, moradores de la calle Paraíso, en el distrito de Arraiján, cierran la vía para exigir al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) el suministro de agua por la línea de distribución y no por carros cisternas. Habitantes que participan en la protesta aseguran que cuando llaman al IDAAN les dicen que no les suministran agua porque ellos son de otro partido político.

El Círculo de Periodistas de Colón, apoyado por diferentes grupos gremiales de la provincia, realiza una marcha simbólica “Por el respeto y la unidad”, con la participación del periodista Hugo Enrique Famanía, quien la semana pasada fue agredido verbalmente por el presidente de la República, Ricardo Martinelli. La marcha recorre el sector de calle 9 y 10 avenida central, y finaliza con un breve mitin en el parque.

Miércoles 25

Los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana realizan una protesta pacífica frente a la Procuraduría General de la Nación, exigiendo una investigación por el supuesto soborno al presidente Ricardo Martinelli ofrecido por el italiano Valter Lavitola.

Los estudiantes de la Universidad de Panamá marchan hasta las instalaciones del MEF en la vía España, para manifestar su oposición ante el aumento de 45 centavos de dólar al pasaje en el Metrobús. Al llegar al MEF, realizan un cierre parcial de la vía para exigir una tarifa única –en rutas troncales– de 25 centavos de dólar para toda la población.

Jueves 26

Los sindicatos panameños deploran la medida que decreta el lunes 30 de abril como día de asueto laboral, luego de que el gobierno transfiriera el descanso obligatorio del 1 de mayo, Día de Internacional de los Trabajadores, para el mencionado día. El SUNTRACS califica el cambio de la celebración como un insulto a la clase obrera panameña.

Los empleados de la Universidad de Panamá salen a protestar para exigir un mejor salario y bajar el costo de vida. La manifestación comienza alrededor del medio día en la carretera Transístmica, donde cierran un carril de esta importante vía.

Viernes 27

La Coordinadora Nacional de Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud (CONAGREPROTSA) anuncia una huelga para el lunes 14 de mayo a las 12 de la noche si el gobierno no atiende sus peticiones, entre las que destaca la revisión de la escala salarial. De igual manera deploran que la insuficiencia de profesionales, técnicos, asistentes y auxiliares de la salud por falta de nombramientos, conlleva una sobrecarga laboral de altos niveles. El dirigente Álvaro Lozano, en un pronunciamiento, menciona que las autoridades no han cumplido con los acuerdos pactados en 2005, 2006, 2009 y 2011.

Periodistas independientes del distrito La Chorrera realizan una misa y una marcha por la libertad de expresión. La actividad cuenta con la participación de miembros de la sociedad civil, dirigentes de los educadores, políticos y del periodista Hugo Famanía, quien pide a los colegas estar atentos para que el acuerdo de palabra que se dio en la presidencia de la República se concrete el 3 de mayo, durante la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión.

Sábado 28

Trabajadores pertenecientes a la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) vuelven a protestar frente al complejo hospitalario de la vía Transístmica. Priscila Vásquez, vocera de este grupo, explica que las acciones continuarán hasta que la administración atienda la propuesta de aumentar 300 dólares en sus emolumentos y la revisión de la escala salarial de los colaboradores.

Domingo 29

La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y el FRENADESO se reúnen para abordar el tema del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Genaro López, secretario general de ambas organizaciones, afirma que pese a la imposición del día de asueto, decretado por el gobierno nacional, ellos harán su marcha el martes 1 de mayo a las cuatro de la tarde, y saldrá del Parque Porras con todos los gremios de trabajadores unidos.

Lunes 30

Los distintos gremios de salud de la CSS y el Ministerio de Salud amenazan con una huelga indefinida que iniciaría a partir del 14 de mayo, si sus peticiones sobre aumento salarial no son discutidas o cumplidas por las autoridades. Los gremios anuncian que se mantendrán unidos y planeando acciones de protesta ante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Glosario de siglas

ACP	Administración del Canal de Panamá
AFUSA	Asociación de Funcionarios de la Salud
ANFACSS	Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja del Seguro Social
ANPATE	Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos de Enfermería
APAVE	Asociación de Productores de Arroz de Veraguas
APP	Asociación Público Privada
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
CONAGREPROTSA	Coordinadora Nacional de Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud
CONUSI	Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
COPA	Compañía Panameña de Aviación
COTRADIN	Consejo de Transporte del Interior
CSS	Caja de Seguro Social
FAD	Frente Amplio por la Democracia
FRENADESO	Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
MEDUCA	Ministerio de Educación
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINSA	Ministerio de Salud
MITRADEL	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
MPU	Movimiento Popular Unificado
PP	Partido Popular
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” de la ciudad de Panamá.

Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.

Fuentes: A EVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red y Partido Alternativa Popular.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Panamá

Mayo de 2012

Editada en septiembre de 2012



Asdi
Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1156

**Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá**



Integrantes Marco A. Gándasegui
Azael Correa

Fuentes A EVE Panamá, FRENADESO, Radio
Temblor, Kaos en la Red y Partido
Alternativa Popular

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Panamá

Cronología del conflicto social

Mayo de 2012

Martes 1

Alrededor de 5 mil personas participan en la marcha que parte del Parque Porras, en el sector de Calidonia, con destino a la Plaza 5 de Mayo, en la capital panameña, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y que tiene como consigna principal la protesta por el alto costo de la vida en el país. Organizaciones obreras, estudiantes y miembros de la sociedad civil cuestionan la política económica del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, y lo responsabilizan por el aumento en el costo de los productos de la canasta básica familiar.

Miércoles 2

Moradores del distrito Buena Vista, en el corregimiento del mismo nombre en la provincia de Colón, mantienen cerrada la vía Panamá - Colón, porque desde hace más de 15 días no cuentan con el suministro de agua potable. La manifestación causa un bloqueo descomunal, ya que muchos automóviles no pueden pasar hacia la provincia atlántica y la ciudad capital, el cierre inició alrededor de las cinco de la mañana. Miguel Ángel Guerrero Fruto –residente del área–, indica que no cuentan con una sola gota de agua en sus tanques de reserva, por lo que piden de forma urgente la intervención de las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), a quienes también exigen se presenten en el lugar.

Jueves 3

Padres de familia y educadores de la Escuela “El Valle de Arraiján” decretan un paro de clases como medida de presión para que las autoridades de los ministerios de Educación y Salud den solución inmediata a los problemas que afectan ese plantel educativo. En el recinto educativo hay 800 estudiantes, que sólo cuentan con un servicio sanitario, no tienen trabajadores manuales, tampoco inspectores y no hay docente de primer grado. Tales carencias motivan a los alumnos y maestros a suspender las clases. Marcela de Domínguez, madre de familia, dice que el principal problema en la escuela es que la planta de tratamiento no funciona.

Un grupo de trabajadores de “Mi Bus” protesta en las instalaciones de la estación “24 de Diciembre” y decide permanecer en el patio donde están estacionadas las unidades del Metrobús. Los manifestantes denuncian estar secuestrados por la empresa, ya que alegan que les retienen los bonos cuando se ausentan por incapacidad médica, además de otras supuestas irregularidades.

Viernes 4

La falta de diésel exonerado vuelve a ser la causa para que los transportistas de la estación “24 de Diciembre” en el área este de la provincia de Panamá, decidan suspender el servicio que brindan hacia la ciudad capital. Los más afectados son los cientos de usuarios que a diario utilizan el transporte para dirigirse a sus trabajos, escuelas u otros lugares. Los transportistas expresan que ya no aguantan más, por lo que piden al gobierno una solución, ya que quieren respuestas concretas y no paliativas.

El Movimiento Indígena “10 de Abril” da un plazo de 15 días al gobierno para que tome alguna decisión respecto al futuro que tendrá el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, cuyo promotor es la empresa Genisa. Declara además una reunión general el lunes 7 en el centro educativo de Nuevo Palomar, para analizar las próximas acciones a realizar, y no se descarta que terminado el plazo de 15 días vuelvan a cerrar las calles. También denuncia que el lunes 30 de abril, en la escuela de Llano Culebra en la comarca, representantes de la empresa Genisa repartieron volantes a los estudiantes sobre la importancia de la lectura sin el aval de la comunidad, por lo que advirtió que la próxima vez que se acerquen a las comunidades lo hagan bajo su propio riesgo.

Lunes 7

Una inusual protesta contra periodistas se realiza este domingo en las afueras del *Canal Plus*, ligado al gobierno de Ricardo Martinelli. El comentarista Carlos Zavala, acompañado de los hermanos Holanda y Hugo Polo, critica a el ex presidente del Fórum de Periodistas para la Libertad de Expresión, Guido Rodríguez, a Norma Núñez Montoto, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, a Guillermo Adames, ex presidente de ese mismo organismo, y a Roberto Eisenmann, fundador del diario *La Prensa*. En la manifestación pacífica, señala que los comunicadores le habrían pedido al mandatario Ricardo Martinelli el “cierre del programa en *Canal Plus*”.

Jueves 10

Roberto Mendoza, operador de grúas con cinco años de servicio en *Panama Ports Company*, es despedido verbalmente junto a otros compañeros del Puerto de Balboa y posteriormente recibe su notificación por escrito. Los ex empleados denuncian que han sido más de 115 trabajadores del sector Pacífico y aproximadamente 25 en el puerto de Cristóbal, en Colón, los que han sido cesados supuestamente por no cumplir con sus horarios de trabajo. El cese de estos obreros, en una empresa que hace poco padeció una huelga con pérdidas millonarias, puede alentar otra paralización.

El responsable de la muerte del indígena Jerónimo Rodríguez Tugrí, durante las protestas de marzo pasado, aún es desconocido para la Fiscalía Segunda del Tercer Distrito Judicial, la cual continúa con las investigaciones. De acuerdo con la fiscal Nedelka Díaz, en un reporte policial se hace constar que en el área donde murió Rodríguez Tugrí había 80 unidades policiales, pero sólo 12 de ellas tenían escopetas. Explica que se llamará a declarar, al azar, a algunos de los policías que no portaban armas.

Viernes 11

Álvaro Lozano, vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud (CONAGREPROTSA), asegura que el personal de salud mantiene el llamado a paro para el próximo lunes 14 de mayo. La suspensión de labores abarcará a trabajadores encargados de estadísticas y registros médicos, a técnicos en enfermería y rayos x y a trabajadores sociales, indica Lozano. Según el funcionario, la paralización será respaldada por unas 32 organizaciones que ya se encuentran listas. No obstante, Lozano manifiesta que la puerta para el diálogo se mantendrá abierta todo el fin de semana.

Al menos 200 padres de familia, del Centro Básico General “La Inmaculada Concepción”, ubicado en el corregimiento Carlos Santana del distrito de Santiago, en Veraguas, se declaran en alerta ante el futuro traslado de esa escuela. Los habitantes señalan que la idea de reubicar el colegio, de donde ha funcionado desde 1976, es decir hace 35 años, surge de la ministra de Educación, Lucy Molinar, durante una visita a las instalaciones de la escuela. Según los lugareños de Concepción, el plan es trasladarlo al Cangrejal, un poblado situado a kilómetros de distancia.

Sábado 12

Médicos y funcionarios del sector salud en la provincia de Veraguas confirman que apoyarán la huelga general convocada para el lunes 14 de mayo exigiendo el aumento de salario. Juan Ortega, cardiólogo y miembro de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), da a conocer que respaldarán el paro, pues hay acuerdos pactados que no se han cumplido. El dirigente también expresa que en la pasada huelga, que duro casi un mes, las autoridades del gobierno nacional hicieron acuerdos, los cuales aún no se han atendido. Asimismo señala que el próximo lunes no habrá atención médica para los pacientes en Veraguas. Sólo se atenderán casos de extrema urgencia.

Domingo 13

Ante la reiteración de los distintos gremios del sector salud –médicos y administrativos–, para ir a una huelga de 24 horas prorrogables este lunes 14 de mayo, la Caja del Seguro Social (CSS) emite un comunicado donde expresa que no entiende ni acepta la medida que pretenden tomar los dirigentes gremiales. “Se está promoviendo un aumento del 14% a los que ganan menos de 799 dólares; de 12% a los que ganan entre 800 y mil 499 dólares; y de 10% a los que ganan más de mil 500 dólares, exceptuando al director general, subdirector general, a los directores ejecutivos y a los directores y subdirectores nacionales, ajuste salarial que se hará efectivo parcialmente a partir del 1 de octubre de 2012, y el resto, en abril del 2013”, asegura la institución.

Alrededor de seis agrupaciones de docentes se reúnen en la sede de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), en la ciudad de Santiago, donde acuerdan celebrar una marcha el próximo 24 de mayo. Yadira Pino, secretaria general de AEVE, dice que ese mismo día también entregaran un pliego de peticiones a la ministra de Educación, Lucy Molinar, en el cual le dan de plazo hasta el 4 de junio para reanudar las negociaciones con los docentes. “El alto costo de la vida, los pagos atrasados de los docentes, el ascenso de categorías, la equiparación salarial, entre otros, son los temas que aún no tienen respuesta por parte del Ministerio de Educación” expresa Pino.

Lunes 14

Nuevamente mil 500 docentes de seis agrupaciones magisteriales acuerdan darle un ultimátum a la ministra de Educación, Lucy Molinar, para que antes del 4 de junio responda a su pliego de peticiones. Maestros de las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá y Veraguas aprueban apoyar una gran marcha el próximo 24 de mayo en la ciudad capital organizada por la AEEV.

La mayoría de las organizaciones obreras que funcionan dentro de la CSS –unas 35– acuerdan un paro de 24 horas, que pueden ser prorrogables. La suspensión es apoyada por médicos, administrativos, técnicos y trabajadores manuales. Los gremios citan la Ley 51 de la CSS, la cual explica que los aumentos de salario deben darse de acuerdo al nivel de inflación que, conforme a sus líderes, está en un 30%, por tanto exigen que el aumento sea proporcional a este porcentaje.

Martes 15

El subdirector de la CSS, Marlón de Souza, señala que habrá sanciones y demandas contra todo el personal involucrado en los actos vandálicos que se presentaron durante la protesta en el Complejo Hospitalario Metropolitano. Un minúsculo grupo de empleados de la entidad arrojó piedras, botellas y objetos contundentes contra policías antimotines que estaban cerca del complejo. En conferencia, De Souza, junto a Javier Díaz, jefe de Prestaciones Médicas de la CSS, demeritó el paro de los grupos administrativos del sector salud y aseguró que solo es apoyado por el 3% de los trabajadores, es decir, alrededor de 700.

Familiares y enfermos afectados con el veneno dietilenglicol vuelven a protestar. Esta ocasión hacen una vigilia en las afueras de la Iglesia Don Bosco. Los manifestantes exigen la renuncia del director general de la CSS, Guillermo Sáens-Llorens, en medio de una jornada de protestas en reclamo de aumentos salariales y un paro de 48 horas prorrogables.

Habitantes del distrito Brizas de Buena Vista, en el corregimiento del mismo nombre, en la provincia de Colón, protestan desde las 6 de la mañana para exigir el suministro de agua potable, del cual carecen desde hace varios días. Los afectados escenificaron una protesta similar hace menos de dos semanas, por lo que una vez más deciden salir a las calles para exigir al IDAAN que cumpla con lo acordado, que era abastecerlos tres veces por la semana.

Se cumplen las primeras 24 horas de un paro laboral de 48 horas convocado por los médicos, empleados administrativos de la CSS y especialistas del Ministerio de Salud (MINSAL). La suspensión de actividades se debe a la demanda de un aumento general de sueldo. Al mediodía, es cerrada la vía Transistmica frente al Complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid”.

Miércoles 16

El ministro de Salud, Franklin Vergara, reitera la disposición del gobierno a entrar en un diálogo que ayude a superar el paro que iniciaron el pasado lunes los trabajadores administrativos, médicos y profesionales de la salud que laboran en la estatal CSS. Al cese de actividades lo emprendieron los trabajadores en reclamo de una revisión de la escala salarial y en rechazo a la privatización de los servicios públicos de la salud, así como en favor de la libertad sindical y de mejores condiciones

laborales. La protesta derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de unidades antimotines en un tramo de la transitada Vía Transítmica de la capital panameña.

Funcionarios de la CSS que laboran en el Complejo Hospitalario “Manuel Amador Guerrero”, la Policlínica “Hugo Spadafora” y la Policlínica de Sabanitas, cierran los cuatro carriles de la vía Panamá-Colón, frente a las instalaciones de esta última unidad. Los manifestantes han incendiado llantas y otros objetos para impedir el paso de vehículos desde y hacia la ciudad de Colón, provocando un gran congestionamiento en ambos sentidos. Agentes de la Policía Nacional se mantienen en los predios, pero hasta el momento no se observa la presencia de agentes de Control de Multitudes.

Las autoridades de la CSS están dispuestas a ir a la mesa de diálogo con los funcionarios que se mantienen por tercer día en paro, siempre y cuando suspendan la medida de presión. Así lo comunica el subdirector de la CSS, Marlon De Souza, quien manifiesta que se busca un diálogo sin presiones ni condiciones. Anuncia que en la mesa de negociación no podrá estar el director general de la CSS ni el ministro de Salud, sino sus representantes, debido a otras funciones que deben cumplir.

El segundo día de paro de administrativos y médicos de la CSS termina con enfrentamientos entre funcionarios y unidades de control de multitudes de la policía nacional. Los manifestantes obstaculizan la vía Transítmica, frente al Complejo “Dr. Arnulfo Arias Madrid”, al mediodía. La respuesta de los antimotines los obliga a retirarse de las aceras inmediatamente. “Tenemos tres años de estar esperando al doctor Javier Díaz, al director de la Caja, Guillermo Sáez Llorens, y al ministro de Salud, Franklin Vergara, y todavía no encuentran la ruta para sentarse a conversar... Que se presenten, y de manera honesta”, pide Álvaro Lozano, de la CONAGREPROTSA.

Jueves 17

Las autoridades de la CSS y el MINSA están dispuestas a ir a la mesa de diálogo con los administrativos y médicos, siempre y cuando suspendan la huelga; así lo reitera el director de la institución, Guillermo Sáez Llorens. También asegura que cuando se logra integrar una mesa de diálogo, siempre son los dirigentes de los gremios quienes se levantan. Además expresa que no entienden porque el punto más significativo de la huelga sea el tema salarial. En ese sentido, alega que no encuentran ninguna justificación luego de anunciar el aumento de salarios realizado para los funcionarios de la CSS.

Propietarios de los apartamentos del edificio Begonia, en Calidonia, cierran por una hora la vía en protesta por las rajaduras que presenta la infraestructura. El inmueble, ubicado cerca de las obras de la estación de El Marañón de la línea 1 del metro, sufre los estragos por la movilización de equipo pesado. La Universidad Tecnológica informa que dentro de cinco años la estructura será inservible.

Viernes 18

Gerardo González, secretario general de la Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja del Seguro Social (ANFA-CSS), realiza un llamado a todos los gremios sindicales del país para que se unan a la medida de protesta que mantienen por quinto día consecutivo. Las declaraciones de

González se dan luego de que él decidiera –como protesta– levantarse de la mesa de diálogo entre funcionarios, médicos, autoridades de la CSS y del MINSA. Según el funcionario, se retiró debido a la prepotencia del subdirector de la institución, Marlon de Souza, quien les dijo que no aceptarían la petición de no represalias contra los huelguistas.

Alrededor de las seis de la tarde, los gremios médicos y administrativos reunidos con las autoridades de la CSS en la Curia Metropolitana deciden llegar a una conciliación; no obstante, el paro se mantiene. Priscila Vásquez, dirigente de la ANFA-CSS, expresa que una las condiciones que exigen a las autoridades de la CSS es realizar reuniones por un mes a partir de este día. Según Vásquez, el director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, se comprometió a estar en las negociaciones, revisar la propuesta salarial, reintegrar a los dos funcionarios que fueron destituidos, y no tomar represalias con el personal. “Si cumplen con estas peticiones levantamos el paro”, expresa Vásquez.

Sábado 19

Padres de familia de la Escuela “Lucas Bárcenas”, ubicada en Arraiján, realizan una protesta por la falta de agua que ha afectado varias semanas al plantel, además de las pésimas condiciones del centro escolar, donde hay hacinamiento en los salones. Los manifestantes acuerdan un plazo de 15 días para que el gobierno dé solución a las demandas de este plantel. David Reyes, presidente del grupo de padres de familia, denuncia que los estudiantes tienen que comer frente a los sanitarios que, de paso, están en pésimas condiciones.

Domingo 20

La sociedad civil, reunida en la Asamblea Ciudadana, anuncia su respaldo irrestricto al gremio médico y a los administrativos de la CSS, cuyo paro cumple una semana. El respaldo se confirma luego de que funcionarios en huelga expusieran, en una asamblea general de la Asamblea Ciudadana, las trabas al diálogo que imposibilitan ponerle fin a la huelga. Los empleados exigen un aumento salarial equitativo y universal, mas no escalonado. Las organizaciones de la sociedad civil reclaman que las autoridades de la CSS estén violando el derecho sindical y la huelga, destituyendo funcionarios.

Alrededor de 20 indígenas del sector El Vigúí, en Veraguas, paralizan en horas de la tarde el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, como medida de presión debido a lo que consideran el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo, asegura el dirigente Toribio García. Los manifestantes entran a la hidroeléctrica por una zona montañosa contigua y llegan hasta un área donde más de una decena de trabajadores de Genisa S.A. –empresa promotora del proyecto– se encuentra extrayendo tierra con máquinas especializadas. Los indígenas son replegados por las unidades antidisturbios de la policía nacional, quienes les lanzan bombas lacrimógenas, con la finalidad de expulsarlos de la hidroeléctrica.

Lunes 21

Por sexto día consecutivo los trabajadores de la ANFA-CSS se concentran en la vía Transistmica a protestar por mejores condiciones laborales y escala salarial, mientras sus dirigentes mantienen un diálogo con las autoridades del sector salud. A diferencia de otros días, los funcionarios no cierran la vía ni realizan una marcha; solo se aglomeran en las aceras frente al complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid”. El tema central de la mesa de diálogo es que las autoridades de salud no tomen represalias contra los manifestantes para que se pueda levantar la huelga.

Médicos y funcionarios que se encuentran en huelga desde el pasado 14 de mayo manifiestan que acudirán a la mesa de diálogo con las autoridades de la CSS y el MINSA sólo si les garantizan que no habrá represalias para poder levantar la medida de presión. Así lo expresa Álvaro Lozano, dirigente de la CONAGREPROTSA, quien considera que la actitud de las autoridades de salud ha sido intransigente, motivo por el cual no se levantó la huelga el pasado viernes. Por su parte, el padre Eusebio Muñoz, quien actúa como mediador de la Iglesia Católica, pide a las partes en conflicto superar el punto sobre las represalias y restablecer el servicio de salud.

Indígenas de la comarca Nágbe Bugle amenazan con apoderarse del área donde se realizan los trabajos del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, ubicado en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí. Además, otros grupos podrían sumarse a la causa. Se trata del movimiento 10 de Abril, liderado por Ricardo Miranda, quien advierte que el gobierno no ha cumplido con lo pactado en la mesa de diálogo con los indígenas. No se descartan manifestaciones y hasta cierres de calles. A pesar de que el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, rechaza las aseveraciones de los ngâbes sobre el incumplimiento de los acuerdos, los indígenas se sienten inconformes. Fábrega dice que se trata de un grupo minoritario que busca detener Barro Blanco.

El tercer día de negociación entre los gremios que se encuentran en paro, los directivos de la CSS, el MINSA y la Iglesia Católica, mantiene en expectativa a la población asegurada. La esperanza de los pacientes que acuden a las instalaciones del seguro se centra en que el diálogo levante la medida de presión que mantienen los funcionarios. El dirigente médico Fernando Castañeda espera que hoy se logre un avance significativo en las conversaciones entre las partes. Castañeda expresa que aguarda que el primer punto –el único presentado– se logre discutir y esto de salida para poder presentar otros aspectos y levantar la huelga.

Miércoles 23

Guillermo Sáez Llorens, director de la CSS, informa que desde que se iniciara el paro de los administrativos y funcionarios de la CSS, se han perdido alrededor de 372 citas y un promedio de mil 500 cirugías. Sáez reitera que se descontarán las inasistencias de los colaboradores que no asistan a sus puestos de trabajo.

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, insta a los huelguistas –médicos y funcionarios administrativos– de la CSS, a retomar sus funciones tras cumplir diez días de paro. El mandatario considera que es importante que la medida de presión –el paro– sea levantada y el diálogo continúe, porque muchos están siendo afectados. Indica que “se puede dialogar”, retomando sus funciones y brindando una atención de calidad a los asegurados.

La calma reina en las inmediaciones del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, tras cuatro días de enfrentamientos entre unidades policiales e indígenas, mientras en la capital un grupo de indígenas reinicia las protestas y cierra, casi una hora, el tráfico vehicular en la Plaza 5 de Mayo. A diferencia de días anteriores no hay enfrentamientos en el área de Barro Blanco. En los dos focos de protesta, los indígenas advierten que no dejarán que les quiten sus tierras. “No le vamos a regalar la comarca ni al gobierno ni a nadie”, dice uno de los líderes indígenas que encabeza la protesta en la Plaza 5 de Mayo. Aunque fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para reactivar el tráfico, no hubo enfrentamientos.

Jueves 24

Yadira Pino, dirigente de la AEVE, manifiesta que la Marcha Nacional por la Educación Panameña sin racismo, con Derechos Humanos y Sociales, que realizarán por la tarde, busca entre otras cosas rechazar las iniciativas que promueve el Ministerio de Educación, y que de no ser escuchados por las autoridades, no descartan el uso de la huelga. Pino detalla que también exigen la reapertura de las mesas de diálogo para la transformación integral de la educación panameña.

Los más de 180 trabajadores despedidos por Panama Ports Company de los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal, en Colón, se suman a la marcha convocada a las cuatro de la tarde desde el Parque Porras. Max Estrada, uno de los destituidos, dice que la ministra de Trabajo, Alma Cortés, “los ha puesto a esperar”; sin embargo, siguen los despidos.

Viernes 25

Los universitarios cierran alrededor de las 10 de la mañana los cuatro carriles de la transitada vía Transístmica frente a la Universidad de Panamá. Los estudiantes muestran su descontento por el alto costo de la vida, la canasta básica y el problema del combustible. Además exigen que se investiguen los casos de corrupción en el gobierno y se solidarizan con los indígenas de Barro Blanco. Quemán llantas y algunos desechos para impedir el tráfico vehicular. Los antimotines de la Policía Nacional llegan poco después de iniciada la protesta y proceden a replegar a los estudiantes, quienes se refugian en la Casa de Méndez Pereira para no ser arrestados. Los universitarios lanzan objetos a los uniformados.

Operadores de taxis de San Carlos y moradores de La Ermita, en ese distrito, bloquean la entrada de la vía que conduce a esa comunidad por la falta de transporte. Los manifestantes critican la negligencia de los funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que en cinco años no han resuelto la falta de transporte en esta comunidad ni tampoco permiten a nuevos conductores de taxis brindar el servicio, ya que constantemente son sancionados, obligando a los moradores, entre ellos trabajadores y estudiantes, a caminar cinco kilómetros diariamente para dirigirse a su destino.

Yadira Pino, secretaria general de la AEVE, aprovecha el día de paro para recordarle a la ministra, Lucy Molinar, que tiene hasta el 4 de junio para responder a sus peticiones.

Sábado 26

El dirigente Carlos Bichet, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Panamá, comunica que se estarán reuniendo ante posibles sanciones contra los universitarios. El Consejo Académico, máximo órgano de gobierno de la Universidad de Panamá, planea sancionar a los estudiantes que se enfrentaron contra los antimotines el viernes 25. Bichet, del Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria (MJPR), señala que los grupos se estarán reuniendo para tomar decisiones unitarias y en conjunto ante cualquier posibilidad de sanción.

El rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, informa que el lunes 28 de mayo no habrá clases en el campus central, ya que el Consejo Académico tomará una decisión sobre los estudiantes que se enfrentaron a la policía el viernes pasado. Por otro lado, los centros regionales y el Domo Universitario de Curundu sí tendrán clases de manera normal. El rector explica que el Consejo Académico está planteando sancionar a los estudiantes que se enfrentaron a los antimotines. Agregó que los estudiantes rompieron el sistema de protección y abrieron las puertas de la universidad durante las protestas para que entraran personas foráneas.

Los diferentes gremios de educadores de Panamá informan que darán de plazo hasta el lunes 4 de junio para retomar la mesa de diálogo con la ministra de Educación, Lucy Molinar. Además manifiestan que aún están a la espera de que la ministra dé respuesta a las peticiones planteadas el 24 de mayo al finalizar la marcha proclamada. Por su parte, la ministra Molinar, expresa que todo lo que debe hacerse se hará en el momento oportuno y se tratará de reanudar el diálogo con los gremios educativos. Mientras tanto, el líder Luis López manifiesta que si la ministra Molinar no desea conversar con ellos, tomarán medidas de presión. La mesa de diálogo fue cerrada por la titular de Educación en octubre de 2011.

Domingo 27

Indígenas del movimiento 18 de Mayo continúan en el campamento cerca de Barro Blanco, donde la empresa Genisa S.A. trabaja en el proyecto hidroeléctrico del distrito de Tole, provincia de Chiriquí. Los Ngäbe inician una serie de reuniones en diferentes comunidades para explicar a las personas el motivo de su lucha, y anuncian que luego de estas consultas no descartan nuevas acciones de protesta. Víctor López, quien reside en Boquete, dice que todas las comunidades se están uniendo para defender las aguas del Río Tabasará, que es una de las fuentes naturales más importantes que atraviesa las tierras de la comarca.

Lunes 28

La Comisión Especial de la Universidad de Panamá tiene en la mira a alrededor de cinco dirigentes estudiantiles para que respondan por los enfrentamientos con los antimotines del pasado viernes 25 de mayo. Los universitarios son citados, mediante nota, a la Vicerrectoría Administrativa a las 11 de la mañana del martes 29 de mayo, imputándoseles un cargo por “alterar el orden público”. Carlos Bichet, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Panamá, uno de los citados, explica que se van a negar a cualquier sanción y lo que harán es intensificar las acciones contra el “régimen de Ricardo Martinelli”.

Martes 29

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá resuelve suspender a seis estudiantes, tras los enfrentamientos con los antimotines el viernes 25 de mayo. En un comunicado, se explica que luego de la recomendación de la Comisión de Disciplina Ampliada se decidió “la separación” por tres años de los estudiantes Omar Concepción y Martín Castillo, así como “la separación” por un semestre de los estudiantes Aaron Bracho, Carlos Bichett, Henry Ferguson y Juan Apolayo. “El Consejo Académico de la Universidad de Panamá decide la separación de hasta 3 años para estudiantes que han reincidido en acciones de protesta que han puesto en peligro la vida, bienes y honra de la familia universitaria”, señala.

En solidaridad con sus hermanos ngäbe buglé, que han sido reprimidos por las unidades policiales en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, un grupo de indígenas cierra parcialmente una de las vías aledañas a la transitada Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá. Alba Pedrol, dirigente del grupo, informa que a la acción la realizan en rechazo a la Ley 11, ya que más de una veintena de sus compañeros ngäbes aún siguen en el movimiento de lucha en las inmediaciones del río Tabasará. Según Pedrol, se sienten traicionados por la cacique general, Silvia Carrera, y por los dirigentes de la Coordinadora, pues considera que lo que buscan es hacer negocio entre ellos mismos.

Jueves 31

Moradores de la comunidad de Pedregalito, en el distrito de Boquerón, cierran la vía interamericana, a la altura del puente sobre el río Piedra, por espacio de tres horas aproximadamente. Los manifestantes exigen que les reparen las calles, ya que estas están en pésimas condiciones. Además piden que se canalice el río Piedra. Leonel Caballero, representante del área, dice que cuando colapsó el puente sobre el río Piedra, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas se comprometieron a canalizarlo, promesa que nunca se ha cumplido, y que al parecer la única manera en que el gobierno entiende es a través de cierres de calles.

Glosario de siglas

AEVE	Asociación de Educadores Veragüenses
ANFA-CSS	Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja del Seguro Social
CONAGREPROTSA	Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud
CSS	Caja del Seguro Social
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
MINSAL	Ministerio de Salud
MJPR	Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América Latina

(OSAL-CLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” de la ciudad de Panamá.

Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.

Fuentes: A EVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red y Partido Alternativa Popular.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Panamá

Junio de 2012

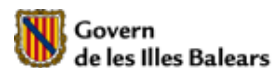
Editada en noviembre de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1172

**Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá**



Integrantes A. Gandásegui
Azael Carrera

Fuentes Fuentes primarias: La Prensa, La Voz del Sandinismo y El Nuevo Diario. Fuentes secundarias: La Barricada, Agencia ACAN-EFE y Radio la Primerísima.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Panamá

Cronología del conflicto social

Junio de 2012

Viernes 1

El Consejo Académico Ampliado de la Universidad de Panamá (UP) decide mantener suspendidas las labores académicas en el Campus Central y las Facultades de Administración Pública, Educación y Administración de Empresas y Contabilidad. La medida se da por las protestas realizadas por los grupos estudiantiles el pasado miércoles 25 de mayo en contra del alto costo de la vida y en solidaridad a los funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) que se encontraban en paro.

Sábado 2

Cansados de esperar la ayuda de las autoridades para solucionar sus problemas comunitarios, los residentes de Las Veraneras, en Arraiján cabecera, deciden darle un ultimátum al gobierno. En un piqueteo interno en su comunidad, los arraijaneños afectados adelantan que si para el próximo lunes no les llega el agua potable se harán sentir en las calles porque, aseguran, los gobernantes solo escuchan de esa forma. Representantes de unas 20 familias anuncian que las protestas en las calles serán respaldadas por moradores de La Veranera 1 y 2, Altos de Howard, Los Tecales –que en 20 años no han tenido agua– y otras como La Polvareda, Valle del Sol, Boyalá y Las Nubes, las cuales también sufren a diario la escasez y muchas veces ausencia del importante recurso.

Domingo 3

La comunidad gay panameña alista sus mayores energías para la octava Marcha por la Diversidad Sexual 2012. La fecha este año es el sábado 30 de junio, saliendo de la vía Argentina a la 1 de la tarde y recorriendo parte de la capitalina vía España. La Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá está pidiendo la reactivación en la Asamblea Nacional del anteproyecto de ley 50, que busca evitar la discriminación por preferencia sexual en suelo panameño. La normativa propone multas de 50 dólares hasta 5 mil dólares y penas de cárcel de 6 meses a 1 año, incluso la inhabilitación de funciones públicas a panameños que ofendan o agredan a homosexuales y lesbianas. Está estancado por los diputados desde agosto de 2010.

Lunes 4

El Consejo Académico anunció que el miércoles 6 de junio se reanudarán las clases en la UP tras varios días de reuniones en el órgano de gobierno en el campus Octavio Méndez Pereira, luego de los enfrentamientos entre universitarios y antimotines el viernes 25 de mayo. Después del cierre de la UP por las manifestaciones del pasado 25 de mayo, en donde universitarios se enfrentaron a la

Policía Nacional, el Consejo Académico decide sancionar por tres meses, y hasta dos años en algunos casos, a los estudiantes involucrados con la suspensión.

Los grupos ambientales tienen previsto realizar dos manifestaciones esta semana en rechazo a los fallos de la Corte Suprema de Justicia que dejaron sin efectos dos resoluciones de áreas protegidas. La primera será el martes, Día Mundial del Medio Ambiente, en el Corredor Sur, y la segunda el jueves en la escalinata de la Corte Suprema. La protesta próxima es convocada por residentes del barrio de Juan Díaz.

Martes 5

Ambientalistas y residentes del corregimiento de Juan Díaz, el más denso del distrito capital, salen a protestar contra la tala de manglares en sus costas. Los manifestantes alegan que la tala de manglares y los rellenos están causando afectaciones, como inundaciones y la puesta en peligro de aves migratorias, por lo que piden la intervención del presidente de la República, Ricardo Martinelli. La resistencia de los moradores crece luego de que las autoridades dieran permiso para la tala de manglares, motivo por el cual han denominado a este día como de duelo y luto en Panamá.

Una tregua de 15 días han concedido los indígenas del Movimiento “18 de Mayo” para que los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entren al área de la comarca y realicen el peritaje que está pendiente, según lo acordado en la mesa de diálogo. Carmen Tedman, activista ambiental y quien acompaña al grupo en sus manifestaciones, explica que los indígenas levantaron su campamento y participarán en reuniones en las diferentes comunidades de la comarca. Los indígenas han manifestado su interés en que se defina la situación que están peleando, no obstante dejan claro que su intención es que no se siga construyendo el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el oriente Chiricano.

El rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, niega que se estudie regular las manifestaciones estudiantiles en esa casa de estudios, razón que mantiene paralizado el campus central. Todo esto ante los rumores de prohibir las manifestaciones de los estudiantes.

Miércoles 6

Luego del cierre por violentas protestas el pasado viernes 25 de mayo, la UP vuelve a abrir sus puertas y reanuda las clases. Desde muy temprano, el cuerpo estudiantil de la UP llega al campus central tras conocer que después de ocho días volverán a recibir sus clases. Mientras, las severas sanciones a los estudiantes implicados en los disturbios por los que se denunciaron daños a las instalaciones de la UP seguirán en pie, según las autoridades académicas.

Residentes de varias comunidades del corregimiento Juan Díaz amanecen protestando en la entrada del Corredor Sur en Llano Bonito. La protesta es en rechazo del fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió temporalmente el estatus de área protegida al humedal Bahía de Panamá, que incluye parte de los manglares de Juan Díaz. Además muestran su inconformidad con la decisión de Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) de disminuir las multas por tala ilegal de mangle y el costo por tala de esta especie para proyectos comerciales.

Jueves 7

La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, anuncia la realización de una marcha para el próximo domingo 24 de junio, convocada por la sociedad civil y grupos ambientalistas del país en defensa de la Bahía de Panamá y frente a acciones que consideran ponen en peligro las áreas protegidas y por ende el rico patrimonio natural del país. Con la manifestación se rechazarán los fallos de la corte suprema conocidos hace poco y que suspendieron la condición de área protegida y de refugio de vida silvestre a la Bahía de Panamá, y a Donoso la de área protegida de uso múltiple. Este último distrito se ubica en la región aledaña al desarrollo minero de las empresas Minera Panamá y Petaquilla Gold, en la provincia de Colón.

Con pancartas y altoparlantes en las escalinatas del Palacio de Justicia “Gil Ponce” protestarían a las 11am miembros de organizaciones no gubernamentales y ambientalistas, de la sociedad civil y pobladores del corregimiento de Juan Díaz, con el propósito de hacerle un llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia para que se protejan las zonas de humedales y manglares en las costas de Panamá y de la zona de Donoso.

Martín Castillo, estudiante de la UP inicia una huelga de hambre como medida de rechazo a las sanciones interpuestas en contra de él y sus compañeros por parte de la institución. Castillo fue suspendido por un periodo de tres años como medida de sanción tras los enfrentamientos con los antimotines el viernes 25 de mayo. El también dirigente alegó que la huelga es indefinida hasta que las autoridades de la campo universitario no suspendan las medidas de sanciones.

Viernes 8

Los residentes de Boca La Caja bloquean la Vía Israel como medida de presión para exigir que el servicio de transporte público entre a la comunidad. Ricardo Arcanzas, vocero de la comunidad, indica que están a la espera de representantes de la empresa Mi Bús para que le den respuestas. Afirma que a Boca La Caja entran grande camiones de carga, por lo que la excusa dada por la empresa, que los buses no pueden entrar por la estrechez de las calles, no es válida. Arcanzas indica que la ruta es una de las más antiguas de Panamá, por lo que piden que los buses entren, pues hay mujeres embarazadas y personas de la tercera edad afectadas al tener que caminar hasta la Vía Israel para poder abordar una unidad del transporte público.

Las manifestaciones en defensa de las áreas protegidas llegan nuevamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Allí se concentraron representantes de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, músicos y grupos ambientales, entre otros, para reclamarles a dos magistrados de la CSJ su fallo en contra de áreas protegidas. Se trata del magistrado Alejandro Moncada Luna y de Efrén Tello, suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega, quienes emitieron, el pasado 27 de abril, dos fallos que suspenden provisionalmente la categoría de áreas protegidas al humedal de la bahía de Panamá y a una zona del distrito de Donoso, en Colón.

El dirigente universitario, Martín Castillo, quien el jueves 7 de junio inició una huelga de hambre indefinida en rechazo a las sanciones interpuestas en contra de él y de sus compañeros por parte de la institución, convoca a una marcha para hoy. La marcha se estará efectuando a las 11 de la mañana, dando inicio desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hasta la Facultad de

Humanidades, esto con el fin de presionar a las autoridades de la UP para que investiguen bien los hechos y suspendan las sanciones que se les han puesto. Castillo fue suspendido por un periodo de tres años, como medida de sanción tras los enfrentamientos con los antimotines el viernes 25 de mayo.

Sábado 9

Policías jubilados y ex funcionarios del sector público recorren las principales avenidas de Penonomé para pedir que se les reconozca el pago de seis partidas del décimo tercer mes.

Domingo 10

Los transportistas del área Este de la provincia de Panamá reiteran que este lunes 11 de junio tomarán la acción de abocarse a un paro de labores por la falta del diésel exonerado que no han recibido desde hace dos semanas, según manifiestan. El paro cubre las rutas de la 24 de Diciembre –Transístmica, Tumba Muerto y Vía España–, así como las rutas internas del sector de La Mesa y cabra. Los transportistas le exigen al gobierno que les den una respuesta, al alegar que el alto costo del combustible representa pérdidas, por lo que muchos no están ganando casi nada para el sustento de sus familias.

Lunes 11

Los residentes del área de Panamá Este se encuentran una vez más con el servicio de transporte suspendido, luego de que los conductores decidieran irse a un paro indefinido de labores al no estar recibiendo el combustible subsidiado. César Matthews, dirigente de los transportistas, manifiesta que el gobierno adeuda más de tres millones de dólares a las petroleras, motivo por el cuál no se les está dando el diésel exonerado en ninguna parte del país para poder mantener el pasaje en 0.25 centavos de dólar.

Los transportistas de área Este de Panamá logran un acuerdo con el gobierno y anuncian que levantarán el paro. Los dirigentes del Transporte de Pacora expresan que el gobierno adeudaba 1.8 millones de dólares a las petroleras en materia de combustible en este sector.

Martes 12

Carlos Bichet, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la UP, inicia este martes 12 de junio una huelga de hambre como medida de rechazo a la sanción interpuesta en contra suya y de sus compañeros por los incidentes ocurridos el pasado 25 de mayo, donde estudiantes se enfrentaron a la policía como medida de protesta al alto costo de la vida y la corrupción y en solidaridad con los trabajadores de la CSS, quienes mantenían un paro. El dirigente universitario se encuentra encadenado en La Colina, donde está la rectoría de la casa de estudios superiores. Bichet sostiene que las sanciones “son políticas y no disciplinarias”.

Las protestas en contra del presidente de la República, Ricardo Martinelli, llegan a Ginebra, Suiza. Los representantes del sector obrero que viajaron a Europa para la 101ª Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) logran el apoyo de las delegaciones de trabajadores de otros países para manifestarse en contra del mandatario panameño. La delegación panameña de trabajadores –encabezada por Víctor Torres, dirigente de la Central de Trabajadores Convergencia Sindical de Panamá– distribuye volantes entre los participantes de la reunión de la OIT, en los que exponen la realidad del sindicalismo en Panamá. Los trabajadores panameños abandonarán la sala cuando Martinelli inicie su discurso. El gesto será apoyado por las delegaciones de trabajadores de 185 países, informa Miguel Ángel Edwards, secretario general de la central.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y dirigentes de los transportistas de Pacora acuerdan revisar el despacho de combustible subsidiado a este sector. El acuerdo se logra tras una reunión y acto seguido la dirigente transportista Idaira de León anuncia que irían a la piquera para notificar a sus compañeros para levantar el paro. La dirigente transportista dice, sin embargo, que no saben por cuánto tiempo tendrán diesel subsidiado, pero confiaba en las gestiones de la ATTT ante las petroleras. Según dirigentes de Pacora, que paralizaron el servicio por la falta de respuestas, el gobierno adeuda 1.8 millones de dólares a las petroleras en materia de combustible sólo en esa ruta.

Padres de familia de la Escuela “Victoriano Chacón”, del corregimiento de Puerto Caimito, en La Chorrera, protestan junto a sus hijos en los predios del plantel para exigirle al Ministerio de Educación la separación del director de ese centro educativo, José González, a quien acusan de malos manejos y actos inmorales. En horas de la mañana, un grupo numeroso de estudiantes junto con sus padres se apuestan en la entrada del colegio, donde minutos antes tratan de impedir la entrada del docente González. Milagros Marciaga, presidenta de la asociación de padres de familia, comenta que están cansados de los actos de corrupción del director de ese plantel, entre los que mencionan el mal manejo de los fondos de inversión social.

Miércoles 13

Docentes del Instituto “Rufo Garay” de la ciudad de Colón cumplen su segundo día de huelga como medida de presión ante el incumplimiento de parte de las empresas responsables de hacer las reparaciones en el plantel educativo y que debieron concluir en el mes de mayo pasado. Los docentes exigen a la Ministra de Educación, Lucy Molinar, que tome cartas en el asunto.

Moradores de la urbanización La Cresta, en los 4 Altos de Colón, realizan una protesta nocturna a la altura de la nueva salida de la autopista Panamá-Colón porque no cuentan con el suministro de agua potable desde el pasado viernes a causa de la ruptura de la línea de 10 pulgadas que colapsó durante unos trabajos de reparación. Los manifestantes exigen al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) que les den pronta respuesta.

Jueves 14

En solidaridad con los estudiantes sancionados, un grupo de universitarios protesta por la noche en la vía Transístmica, frente a la Universidad de Panamá. Otros de los objetivos son manifestarse en

contra de la venta de las acciones de la energía eléctrica y el alza de la canasta básica y por problemas con el Metro Bus, entre otras quejas.

Estudiantes del colegio privado San Agustín, en la ciudad de David, protagonizan una protesta para expresar su rechazo a la construcción de la nueva cárcel en un globo de terreno, propiedad del municipio, en el sector de Campo Alegre. Desde las 7:30am, una masa de alumnos se coloca frente a las instalaciones del plantel y obstaculiza la vía Panamericana en compañía de profesores y vecinos del lugar, con pancartas de oposición al proyecto carcelario.

Viernes 15

La cacica general de la comarca Ngöbe-Buglé, Silvia Carrera, visita mañana a los estudiantes Martín Castillo y Carlos Bichet, que se encuentran en huelga de hambre en el parque Hacia la Luz, en el campus central de la Universidad de Panamá. Una fuente oficial comunica que la visita de Carrera se da como un acto de solidaridad hacia los dirigentes estudiantiles sancionados por las autoridades universitarias, luego de la violenta protesta el pasado 25 de mayo, ya que ellos salieron a la calle a protestar por el alto costo de la vida, en apoyo a los indígenas que se oponen a proyectos hidroeléctricos en la comarca y en solidaridad con los trabajadores de la CSS.

La reforma a la ley que regula la venta de electricidad, que permitiría la venta de las empresas estatales eléctricas, levanta en menos de 24 horas un fuerte frente opositor. El país amanece, literalmente, de cabeza. Los partidos políticos condenan la repentina propuesta del diputado oficialista Carlos Afú de normar la comercialización de las acciones estatales, valoradas en mil millones de dólares. Sustentan que detrás de la iniciativa hay un trasfondo político azuzado por el Ejecutivo. La preocupación es compartida: temen que el gobierno se dedique a vender todos los activos estatales.

El cierre de calle que protagonizan alumnos, acudientes y personal docente del Centro Básico de Cerro Pelado, en la comunidad de Ojo de Agua, distrito de Las Palmas, Veraguas, ocasiona un descomunal tranque en la vía Panamericana, cerca al puente de Viguí. El cierre, que dura al menos dos horas, tenía como objetivo exigir la construcción de una batería higiénica de sanitarios y que se dote al plantel de energía eléctrica, entre otras solicitudes. La obstrucción de la vía afecta a carros particulares, camiones de cargas, buses de pasajeros y turistas de Centroamérica, quienes disgustados pedían a los manifestantes que les permitieran el tránsito.

Sábado 16

En una de las paredes del edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está la lista de los estudiantes *sigma lambda*. Entre los nombres aparece el de Carlos Bichet con un índice de 2.65 de un máximo de 3.00. Justo al frente del mural, Bichet ha colocado una colchoneta y encima un letrero donde se lee: “día 4 de huelga de hambre de la dignidad”. Es el lugar que Bichet ha elegido para llevar adelante su huelga de hambre en rechazo a la sanción que le aplicó el Consejo Académico de la Universidad de Panamá tras los disturbios que se produjeron el pasado viernes 25 de mayo, cuando los universitarios cerraron la vía Transístmica en protesta, entre otras cosas, por el alto costo de la vida.

Domingo 17

Los gremios docentes trazan el camino a la huelga nacional que, por el momento, no tiene fecha definida, pero fue prevista para finales del próximo mes de julio. Los dirigentes gremiales se reúnen, y fijan algunas medidas antes de definir la fecha de la huelga nacional. El próximo jueves 28 de junio realizarán una asamblea en cada una de las provincias y el 12 de julio harán una marcha, vestidos de negro, desde la plaza 5 de Mayo hasta la sede central del Ministerio de Educación (MEDUCA), en Cárdenas. Las medidas son para exigir el reinicio de las negociaciones que fueron suspendidas, según los docentes, por el MEDUCA a finales del año pasado.

Lunes 18

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, señala que lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional nunca debe ocurrir. Las palabras surgen por los incidentes en el Legislativo donde las personas protestan en las gradas y la situación se sale de control, rompen un ventanal que los separa de los diputados y se tiene que suspender el debate en medio de consignas y abucheos a los diputados de gobierno. Martinelli considera como lamentable y dice que la violencia no se debe salir de las manos.

Universitarios cierran un carril de la vía Simón Bolívar –Transístmica– en protestas de lo que acontece en la Asamblea Nacional, donde se está aprobando una ley que permite la venta de las acciones que tiene el Estado dentro de la empresa que distribuye la energía eléctrica. Sin embargo, los policías antimotines llegan y logran despejar la protesta.

La situación se sale de las manos al cuerpo de seguridad de la Asamblea Nacional a medio día de este lunes, cuando varias personas tiran abajo las mamparas que separan las graderías de los puestos de los legisladores. En imágenes televisivas se puede ver como algunos eran agarrados por agentes de seguridad en medio de forcejos, mientras otros golpean las puertas porque no se les permite el acceso al recinto legislativo. En medio de la tensa situación, algunos diputados se encuentran respaldando a los manifestantes, mientras otros –oficialistas– se muestran preocupados por lo que está ocurriendo.

Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), anuncia que el movimiento sindical se encuentra analizando una posible huelga general en rechazo al nombramiento de los magistrados de la Sala Quinta, al considerar que el acto pone el peligro la democracia de Panamá. El dirigente plantea crear un frente bien amplio en contra de las acciones del Ejecutivo; entre ellas, la reactivación de la Sala Quinta; así como la venta de acciones del Estado en la empresa telefónica *Cable & Wireless* y el proyecto de ley 486, que permite la venta de las acciones del Estado en las empresas eléctricas, porque son decisiones antidemocráticas y afectarán a los bienes del Estado. Chavarría considera que sería lamentable que se puedan repetir hechos como los de mayo de 1987.

Martes 19

La Asamblea Nacional de Panamá y sus alrededores es un hervidero. La confrontación, los empujones y el caos son la nota característica por el rechazo a la venta de las acciones del Estado en

las empresas de energía eléctrica y la venta de Cable & Wireless. El ambiente de conflicto y daños en la cerca y pared de plástico que separa el pleno de las gradas fue el motivo para que la presidencia del Legislativo extremara las medidas de seguridad este martes 19 de junio. Los perímetros del palacio Justo Arosemena amanecen acordonados con cercas de ciclón móviles y custodiados por agentes de la Policía Nacional y Unidades del Control de Multitudes.

Luego de que el gobierno revocara su intención de vender acciones del Estado en las empresas eléctricas y telefónicas, y de crear la Sala Quinta, el dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, lamenta que esto se haya dado luego de enfrentamientos y represión. La Policía Nacional de Panamá informa que durante los incidentes en la plaza 5 de Mayo hubo 21 menores retenidos, de los cuales ocho estaban uniformados y trece en civil. Adicionalmente fueron detenidos 26 adultos. “El gobierno del presidente Martinelli siempre espera que haya muertos o heridos para recular ante sus imposiciones. Exijo se derogue para siempre la Sala Quinta, porque esta nació viciada, pues basta con nueve jueces en la Corte Suprema de Justicia”, expresa el ex alcalde Navarro.

Estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí salen a la vía interamericana a protestar, esta mañana, en contra de la venta de las acciones de las empresas eléctricas y telefónicas. Al lugar se han presentado unidades de la Policía Nacional. Los manifestantes señalan que las acciones de protesta continuarán hasta que la asamblea legislativa eche para atrás el proyecto de ley.

Los estudiantes de la UP y del Instituto Nacional (IN) se suman a la protesta en rechazo del proyecto de Ley 486, que privatiza los activos del Estado. Los universitarios cierran uno de los paños de la vía Simón Bolívar en medida de lo que esta ocurriendo en la Asamblea Nacional. A ellos se unen los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) que marchan con banderas hacia la Plaza “5 de mayo”. Mientras tanto, los estudiantes del IN salen las calles para fusionarse con los manifestantes que se encuentran en los predios de la asamblea.

La insatisfacción popular por las últimas acciones de los órganos Ejecutivo y Legislativo terminan de condimentar el caldo de cultivo para que diversos gremios del país se sumaran al Frente por la Defensa de la Democracia, cuya organización inició el pasado jueves entre los partidos de oposición. Reunidos en la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), representantes de más de 40 organizaciones del país acordaron integrar un movimiento social que deberá ser formalizado con la firma de cada uno de sus representantes, a través de un pacto social que en los próximos días sellará el compromiso de cada uno de sus miembros.

Miércoles 20

El Frente por la Democracia hace una marcha del Parque “Porras” hacia la Plaza “5 de Mayo” con la intención de enviarle un mensaje al presidente Martinelli: que no vuelva insistir en privatizar los activos estatales. Sindicatos, grupos de estudiantes y sectores políticos caminan y van unidos contra los proyectos y actuaciones del Ejecutivo, dudando de la Concertación Nacional, mesa donde se verá el tema de la venta de acciones de empresas eléctricas y Cable & Wireless.

Flanqueado por la mayoría de sus ministros, el presidente Ricardo Martinelli anuncia al país la suspensión de las sesiones extraordinarias y, de paso, el retiro del proyecto que permitiría la venta de las acciones del Estado en las empresas eléctricas y la telefónica, y que desistía de ratificar los magistrados de la Sala Quinta de la Corte Suprema, todo esto en medio de protestas y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en la Plaza “5 de Mayo”.

Jueves 21

Grupos sindicales, estudiantiles y agrupaciones docentes, integrantes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), realizan una marcha multitudinaria contra el gobierno de Ricardo Martinelli y en rechazo a los proyectos de venta de acciones de las empresas eléctricas y Cable & Wireless, además del nombramiento de magistrados. Los grupos con banderas de sus agrupaciones, coreando consignas antigubernamentales y portando pancartas, piden al Ejecutivo que frene sus malas actuaciones. El FRENADESO está en contra del Frente por la Democracia, de los colectivos PRD, Partido Panameñista y Partido Popular. Considera que “son la misma cosa”.

Viernes 22

El Parque “Porras” se llena de banderas de Panamá ondeando en manos de políticos, indígenas, obreros y dirigentes de la sociedad civil organizada, que con el canto del Himno Nacional dan inicio a la caminata hasta la Plaza “5 de Mayo” que habían anunciado. Los manifestantes se toman la avenida Perú. Unas 10 mil personas responden a la convocatoria del denominado Frente por la Democracia, todos en contra de las pretensiones del gobierno de vender las acciones del Estado en las empresas telefónica y eléctrica, así como de la Sala Quinta. Aunque el gobierno congeló, por el momento, estos proyectos de ley, la multitud que caminaba en medio de consignas reflejaba la desconfianza.

Sábado 23

Se da a conocer que la Corte Suprema de Justicia recibió el miércoles 23 de mayo de 2012 una denuncia administrativa contra los directivos del Tribunal Electoral (TE) y sus suplentes. El abogado Hugo Polo, en representación del licenciado Ricardo Martinelli en su calidad de presidente y representante legal del partido político Cambio Democrático, formalizó la denuncia donde se pide la destitución de los tres magistrados del TE. Las reacciones no se han hecho esperar. El vicepresidente Juan Carlos Varela, presidente del Partido Panameñista, exige a Martinelli retirar la demanda, mientras que el doctor e investigador Mauro Zúñiga, de la sociedad civil, expresa que Ricardo Martinelli tiene que reelegirse y que si no es por la Sala Quinta será por el Tribunal Electoral.

Domingo 24

La mesa del diálogo de los gremios de la CSS y las autoridades entra mañana a su última semana, pero llega con un ingrediente adicional. Gerardo González, dirigente de la Asociación Nacional de

Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS), manifiesta que el diálogo ha sido un fracaso, porque han estado cuatro semanas conversando y no hay respuestas. González adelanta que si esta semana no hay acuerdos van a plantear la posibilidad de levantar la mesa.

Lunes 25

Ambientalistas, pescadores y miembros de la sociedad civil caminan para rechazar la desprotección de los humedales, en la Cinta Costera de la Ciudad de Panamá, bajo una intensa lluvia. El grupo avanza motivado por la defensa, entre otros aspectos, de la condición de área protegida como refugio de vida silvestre de la Bahía de Panamá al igual que la de Donoso, que fueron suspendidas provisionalmente por fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia. Según el referido fallo faltó una consulta pública para el reconocimiento de la condición de área protegida, lo que no es compartido por los ambientalistas.

Martes 26

Estudiantes y maestros del Centro de Educación Básica General “Luis Jiménez Ruíz”, ubicado en el corregimiento de Puerto Pilon, en la provincia de Colón, piquetean en el patio del plantel para repudiar los actos vandálicos de que fueron víctimas durante el fin de semana. La docente Hermelinda Subía Molinar, explica que un número considerable de leches y galletas nutricionales fueron sustraídas del comedor escolar por sujetos que al parecer utilizaron llaves para abrir la puerta de hierro, porque no hay indicios de que haya sido violentada.

Moradores de Curundú, San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo realizan una marcha en la Cinta Costera a favor de la tercera fase de la obra. La manifestación se realiza desde las 4pm y según Gisela Prieto, presidenta de los moradores de San Felipe, la obra los beneficiaría mejorándoles la calidad de vida. Prieto destaca que la iniciativa brindaría plazas de trabajos a los moradores y desarrollaría el lugar. Esta medida haría que la comunidad mejorara el tema de las viviendas y asegura que el patrimonio no se vería afectado.

Los vientos de una nueva huelga en la CSS se hacen sentir. La medida, que está siendo analizada por los gremios, se produce por la falta de respuestas de las autoridades de la CSS en el diálogo, tras el inicio de las negociaciones que dieron fin a la última huelga que duró once días. Gerardo González, secretario de la ANFACSS, informa que se están preparando para una huelga la primera o segunda semana de julio.

Miércoles 27

Tras la publicación en la *Gaceta Oficial* de la venta de algunas tierras en Amador, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, dice que las decisiones del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo no son vinculantes, a pesar de haber sido rechazada por ese órgano consultivo. El consejo, reunido el viernes 22 de junio, rechazó por unanimidad la venta de las acciones de la empresa Cable & Wireless, las empresas eléctricas y la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón y Amador.

Jueves 28

La Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) realiza una cadena humana en la ciudad de Santiago exigiendo la renuncia de la Ministra de Educación, Lucy Molinar. Según Yadira Pino, secretaria general de la AEVE, existe un rechazo total por parte de los docentes en contra de la ministra. Pino dice que para los docentes, Lucy Molinar es “una ministra que se ha convertido en la dictadora de la educación”. “Vamos a ir a la mesa de negociación, pero no vamos a ir confiados porque la ministra ha violado su palabra en varias ocasiones. No confiamos en esa apertura de las mesa y vamos a exigir que otra persona intervenga en esto y garantice que realmente se cumplan los acuerdos a los que se pueda llegar”, reafirma la dirigente.

Los trabajadores del IDAAN marcharon desde la subse de Carrasquilla hasta la principal de vía Brasil, donde realizan un mitin en señal de protesta ante la posible creación de la Autoridad de Agua. Los funcionarios, que son atendidos por Abdiel Cano, director de la institución, manifiestan que realizarán una marcha hacia la presidencia el sábado 7 de julio. Sin embargo, exigen mejores salarios, capacitación y equipos. Además, no descartaron irse a paro el próximo 9 de julio.

Las palabras del ministro de Asuntos del Canal de Panamá, Rómulo Roux, no son suficientes para borrar las inquietudes de los funcionarios del IDAAN con respecto a la creación de la Autoridad del Agua. Un cordón humano vestido de suéters azules, indumentaria que utilizan algunos empleados de la entidad, amanece en la acera de la sede de Carrasquilla. Luego se mueven, sin interrumpir el tráfico, hacia el edificio central, en la Vía Brasil.

Viernes 29

Docentes y estudiantes de la escuela Eneida Moreno de Castellero, en el corregimiento de Llano Bonito, de Chitré, cierran por 10 minutos un paño de la vía aeropuerto para protestar por la falta de seguridad y por el incremento de actos vandálicos que se registran contra este centro educativo.

Sábado 30

A las 3pm hay una caminata. El punto de encuentro es la esquina de la vía España con vía Argentina y termina en el busto de Einstein, en El Cangrejo. Esta peregrinación recibe el nombre de Marcha por la Diversidad Sexual Gay Pride Panamá 2012, en su octava versión. Con el lema “Aquí estamos, acostúmbrate”, la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero de Panamá anunció su actividad a principios de mes, donde develará quién o qué persona o institución, por mostrar signos homofóbicos, será distinguida con el “huevo rosa”.

Glosario de siglas

AEVE	Asociación de Educadores Veragüenses
ANCON	Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza

ANFACSS	Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social
ARAP	Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
CGTP	Central General de Trabajadores de Panamá
CONATO	Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CSS	Caja de Seguro Social
FRENADESO	Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
IN	Instituto Nacional
MEDUCA	Ministerio de Educación
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PRD	Partido Revolucionario Democrático
SUNCTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
TE	Tribunal Electoral
UP	Universidad de Panamá

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” de la ciudad de Panamá.

Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.

Fuentes: A EVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red y Partido Alternativa Popular.